

INICIATIVA SOBRE
LA DESIGUALDAD DE LA TIERRA
ESTUDIO DE CASO

¿PUEDE LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA SER FUENTE DE DESARROLLO?

UN ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES
Y BIENESTAR DE TRABAJADORES
AGROINDUSTRIALES DE LA
PROVINCIA DE VIRÚ, PERÚ

ANA LUCÍA ARAUJO RAURAU

INTERNATIONAL
LAND
COALITION

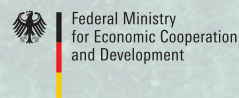
UNITED
FOR LAND
RIGHTS

CEPES
CENTRO PERUANO DE ESTUDIOS SOCIALES

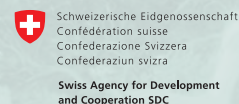
¿PUEDE LA CONCENTRACIÓN DE LA TIERRA SER FUENTE DE DESARROLLO?

UN ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES Y BIENESTAR DE TRABAJADORES AGROINDUSTRIALES DE LA PROVINCIA DE VIRÚ, PERÚ

SOCIOS ESTRATÉGICOS Y DONANTES PRINCIPALES



Government of the Netherlands



ISBN: 978-92-95105-64-5

ANA LUCÍA ARAUJO RAURAU



El contenido de este trabajo se puede reproducir, traducir y distribuir libremente. Este trabajo no se puede utilizar con fines comerciales. Para obtener más información, comuníquese con info@landcoalition.org o consulte: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0>

Las opiniones expresadas en esta publicación son las de sus autores y los entrevistados para este informe. No se corresponden necesariamente con las posiciones oficiales de la ILC o el grupo de referencia de la Iniciativa. Publicación: enero de 2021. *Traducción:* Mariana Cristellys. *Edición:* David Wilson. *Diseño gráfico:* Federico Pinci.

ÍNDICE

LISTA DE ABREVIACIONES	6
RESUMEN EJECUTIVO	7
INTRODUCCIÓN	9
METODOLOGÍA	11
DEL LATIFUNDIO AL NEOLIBERALISMO AGROINDUSTRIAL: UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE VIRÚ	13
DESIGUALDAD DE LA TIERRA Y EMERGENCIA DE UN NUEVO PROLETARIADO AGRÍCOLA	17
TRANSFORMACIONES DEMOGRÁFICAS EN TERRITORIOS AGROINDUSTRIALES	19
La relevancia de la población agropecuaria	19
Género	20
Tipo de área de residencia	22
Grupos de edad	23
Migración	24
EL MERCADO DE TRABAJO AGROINDUSTRIAL EN VIRÚ	27
Informalidad versus formalidad	27
Demanda de mano de obra	28
Régimen de contratación	31
EL RÉGIMEN LABORAL AGROINDUSTRIAL: LA FORMALIZACIÓN DE LA PRECARIEDAD	33
Remuneraciones	33
Sindicalización y negociación colectiva	35
Acceso a la salud	36
Acceso a una pensión digna	38

EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES MATERIALES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES	41
Vivienda	41
Servicios básicos	43
OPORTUNIDADES Y EXTERNALIDADES	47
Educación	47
Mercado de trabajo provincial	49
Criminalidad	50
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES	53
REFERENCIAS	60
DOCUMENTOS EN ESTE ÁMBITO	62

LISTA DE ABREVIACIONES

AFP	Administradora de fondos de pensiones
APTCH	Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos de Chavimochic
CAP	Cooperativas agrarias de producción
Cetpro	Centro técnico-productivo
CTS	Compensación por tiempo de servicios
EBR	Educación básica regular
Enaho	Encuesta Nacional de Hogares
ES	Educación superior
EsSalud	Seguro Social de Salud del Perú
ha	Hectárea
INEI	Instituto Nacional de Estadística e Informática
Minedu	Ministerio de Educación
MTPE	Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
ONP	Oficina de Normalización Previsional
PEA	Población económicamente activa
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
RMV	Remuneración mínima vital
Senati	Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo Industrial
SIS	Seguro Integral de Salud
SSA	Seguro de Salud Agrario
Sunafil	Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral

RESUMEN EJECUTIVO

Desde el giro neoliberal de la economía peruana, el gran agronegocio corporativo y latifundista se ha posicionado como el modelo de desarrollo de la actividad agraria en el Perú, en detrimento del campesinado y de la agricultura familiar. Para ello, el Estado estableció condiciones normativas y políticas que permitieron la concentración de la tierra por parte de estas empresas y su dominio sobre las relaciones laborales. Desde la narrativa del gremio agroexportador, una de las mayores virtudes de este modelo es su gran capacidad de generar progreso entre las sociedades y hogares que articula en su actividad. En ese contexto, esta investigación tiene como objetivo analizar el impacto del empleo agroindustrial en las condiciones de vida y bienestar de los hogares de trabajadores y trabajadoras agroindustriales en la provincia de Virú.

Un primer hallazgo relevante es que el crecimiento de la actividad agroindustrial se ha sustentado en la precarización del empleo. En efecto, se evidenció la creciente práctica del trabajo estacional y de la rotación del personal; como consecuencia natural, se ha consolidado el contrato temporal como el principal régimen laboral de los asalariados agroindustriales. Bajo estas condiciones, el salario de los obreros apenas se ha incrementado en los últimos años y el acumulado de retribuciones anuales no logra superar el acumulado de remuneraciones mínimas vitales, el salario base en Perú. La inestabilidad laboral, el estancamiento de los salarios y otras condiciones establecidas por la agroindustria han limitado significativamente el acceso de los obreros y sus familias a servicios de salud y a una pensión digna. Como resultado, a pesar de la formalidad de este empleo, en la práctica, los trabajadores agroindustriales se mantienen en condiciones equiparables a la informalidad. Además, en todos los casos, se demostró que las mujeres trabajan bajo los regímenes más precarizados y, por defecto, son las que menos logran acceder a los ya recortados beneficios laborales.

Las condiciones materiales de vida de la población agropecuaria de Virú distan de ser óptimas e, incluso, se puede decir que se ubican al borde de la precariedad. Un porcentaje mayoritario de viviendas carece de seguridad jurídica y es de material rústico, adobe. De manera análoga, a pesar de que la cobertura de los servicios básicos -agua, desagüe y energía eléctrica- se incrementó significativamente en la última década, el abastecimiento no es mayoritario ni de calidad. En 2017, el grueso de casas no contaba con alcantarillado público; solo el 63 % de las que disponían de agua potable vía red pública tenía acceso todos los días a este servicio y solo el 12 %, las 24 horas del día. Producto del limitado desarrollo material alcanzado y del continuo flujo de migrantes que suscita la actividad agroindustrial, podemos suponer la existencia de un segmento periurbano o urbano-marginal que vive con altos niveles de precariedad, pobreza y ausencia del Estado.

En relación con las oportunidades, aunque la población agropecuaria de Virú tiene mayor acceso a servicios educativos que la población nacional, su logro en este ámbito es muy similar: la mayoría solo completa parcialmente la educación básica regular y apenas estudia algún tipo de educación superior. Es posible inferir que la precariedad económica de los hogares de trabajadores, y, especialmente, la reducida demanda de empleo calificado y profesional en la provincia limitan las aspiraciones educativas de los jóvenes. Por otro lado, Virú se ha convertido en una de las provincias más inseguras y violentas del país, debido a la extendida presencia de organizaciones criminales. Las carencias materiales, las restringidas oportunidades, y el crecimiento acelerado y desorganizado de la provincia han sido determinantes en la constitución de una sociedad proletaria con bajos niveles de cohesión social y reducida capacidad para generar normas sociales. La criminalidad latente en Virú es la principal externalidad de la actividad agroindustrial local.

A partir de lo señalado, consideramos que el *boom* agroindustrial en Virú ha generado una dinámica de crecimiento sin desarrollo. Ello implica que el crecimiento económico y poblacional se ha producido a expensas de la precarización del empleo, el desborde de la institucionalidad pública y la fractura de las sociedades locales. Como resultado, este modelo resulta atractivo solo para los más pobres y sin tierra, principalmente jóvenes de la sierra; sin embargo, bajo estas condiciones, las familias pueden lograr un desarrollo muy limitado. Mientras las corporaciones agroindustriales concentran e incrementan su rentabilidad, el Estado y la sociedad local -no las empresas agroindustriales- asumen el costo de las externalidades producto de la precariedad laboral y de la criminalidad.

INTRODUCCIÓN

Uno de los pilares del discurso que legitima el modelo de desarrollo del agronegocio en el Perú es la amplia y ascendente capacidad de las empresas agroindustriales para generar empleo formal. Este es un efecto del sostenido crecimiento del sector por más de una década, pero también de las amplias subvenciones provistas por el Estado en el ámbito fiscal y de activos (Eguren et al., 2017), y de normativas, como la Ley de Promoción del Sector Agrario (Ley 27360), que favorece a los agronegocios con regímenes laborales de mayor flexibilidad. En conjunto, estos factores han propiciado el incremento del número de empresas agroindustriales y de sus unidades productivas; a su vez, ello ha generado el aumento de la demanda de mano de obra y del ingreso laboral agrícola (Gestión, 2018). Según la información oficial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE, 2018), alrededor de 300,000 personas son contratadas al año directamente por estas empresas. Sin embargo, según portavoces del gremio empresarial, esta cifra se duplicaría o triplicaría si se tomaran en cuenta los empleos generados en las actividades asociadas al rubro agroindustrial (Del Castillo, 2019). En consecuencia, el sector se atribuye, también, las importantes tendencias de reducción de la pobreza y pobreza extrema de los territorios en los que opera (Andina, 2019).

Diferentes voces -desde la academia y otros frentes políticos- matizan y relativizan la narrativa construida por las agroindustrias respecto del empleo.

Eguren y Pintado (2015) evidencian que, a pesar del casi nulo soporte del Estado, la pequeña agricultura familiar tiene una capacidad de empleo superior a la del agronegocio: más de 3 millones de personas empleadas en la rama agropecuaria provienen de hogares que practican la agricultura familiar.

Por su parte, la aparente calidad del empleo agroindustrial también es cuestionada. Numerosos operativos de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) revelan el estado de informalidad en el que se hallan miles de trabajadores agroindustriales cada año, especialmente durante las temporadas de cosecha (Gestión, 2019). A la par, Rodríguez (2017) demuestra que, en comparación con los trabajadores bajo un régimen de contratación común, los trabajadores agroindustriales perciben ingresos anuales menores y laboran, en su mayoría, bajo contratos de reducida estabilidad. Finalmente, para algunos especialistas, la reducción de la pobreza en áreas de influencia agroindustrial estaría explicada menos por la actividad de dichas empresas que por el crecimiento económico general del país (Ramos, 2018, entrevista a Eduardo Zegarra).

En el marco de esta discusión, las preguntas que necesariamente surgen son

¿cuál es el impacto del empleo generado por los agronegocios en las condiciones de vida y desarrollo de los hogares de trabajadores agroindustriales? En relación con la anterior, ¿qué tipo de trabajadores es incluido marginalmente en esta nueva dinámica económica?

A partir de estas interrogantes generales, pretendemos responder al siguiente cuestionamiento:

¿Es posible generar un desarrollo económico y social amplio en los territorios a partir de una distribución altamente desigual de la tierra?

METODOLOGÍA

La metodología del estudio fue cuantitativa de enfoque estadístico-descriptivo. Así, a partir del uso de medidas de resumen, analizamos un conjunto de características y comportamientos de la población analizada que refieren al fenómeno principal que motiva esta investigación: el empleo agroindustrial y sus impactos sobre el desarrollo local. Las fuentes de información seleccionadas fueron bases de datos elaboradas por el Estado. A continuación, precisamos su nivel de representatividad, así como el conjunto poblacional que analizamos en cada una.

PLANILLAS ELECTRÓNICAS DE 2014 Y 2018 (MTPE)

Recopila los datos registrados en las planillas de las empresas formales de todo el país, entre ellos, los de la rama agropecuaria, como los agronegocios.

- **Nivel de representatividad:** distrital.
- **Conjunto poblacional analizado:** trabajadores empleados bajo el régimen especial agrario de la Ley 27360. Esta base nos proporciona información directa y exclusivamente sobre la población asalariada agroindustrial formal; no considera a trabajadores informales.

CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA DE 2007 Y DE 2017 (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA, INEI)

Levantamiento de información estadística sobre la composición, crecimiento y condiciones materiales de vida de la población total del país.

- **Nivel de representatividad:** distrital.
- **Conjunto poblacional analizado:** población económicamente activa empleada en la rama de la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura, la cual será denominada a lo largo del estudio población agropecuaria. Esta categoría incluye a trabajadores agroindustriales.

ENCUESTAS NACIONALES DE HOGARES DE 2007 Y DE 2017 (INEI)

Encuesta de monitoreo socioeconómico realizada trimestralmente a una muestra nacional de familias que mide variables sociales, económicas y políticas diversas.

- **Nivel de representatividad:** departamental, regional y según tipo de área (urbana o rural).
- **Conjunto poblacional analizado:** hogares dedicados a la rama de la agricultura, la ganadería, la caza y la silvicultura.

2 DEL LATIFUNDIO AL NEOLIBERALISMO AGROINDUSTRIAL: UN RECORRIDO POR LA HISTORIA DE VIRÚ

La provincia de Virú está ubicada en el departamento de La Libertad, en la costa norte del Perú, casi al nivel del mar. Está compuesta por tres distritos: Virú, la capital provincial; Chao; y Guadalupito; los dos primeros son los de mayor relevancia demográfica y económica. En el año censal de 2017, la población de la provincia era de 96,691 habitantes y la población económicamente activa (PEA), de 38,339.

Si bien Virú es una provincia de gran tradición agraria, su rol en la historia económica de la región fue menor a lo largo del siglo XX. Esto se debe a que las principales fuentes hídricas de esta localidad, los ríos Virú y Chao, solo cargan agua durante la temporada de lluvias en la sierra (de octubre a marzo) y permanecen secos el resto del año.

Así, mientras las grandes haciendas azucareras de la época alcanzaban altos niveles de desarrollo productivo -en otros valles de irrigación continua, como Moche o Chicama-, en Virú, las medianas y grandes haciendas que dominaban el grueso del espacio agrícola estaban condicionadas por la escasez hídrica.

Como resultado, una proporción considerable de sus territorios no era producida directamente, sino a través de relaciones serviles como el yanaconaje o el coloniaje.¹ Particularmente en el valle de Chao, la irrigación era tan pobre que las medianas haciendas se abocaban solo a la actividad pecuaria.

El posterior proceso de Reforma Agraria,² efectuado en la provincia desde 1970, reorganizó el latifundio; este pasó a ser gestionado por los antiguos trabajadores de hacienda bajo el modelo empresarial de cooperativas agrarias de producción (CAP). Este efímero período duraría apenas una década: a inicios de la década de los ochenta, el grueso de CAP en Virú ya había sido liquidado y los predios, parcelados entre los



1 El *coloniaje* o *yanaconaje* eran relaciones serviles a partir de las que los trabajadores de hacienda recibían pequeños fundos a cambio de una fracción del producto cosechado, la cual era estipulada por el hacendado o gamonal. Cuando las haciendas atravesaban temporadas o años de baja producción, esta era una modalidad utilizada para mantener cierto nivel de renta sin asumir el riesgo de inversión.

2 La Reforma Agraria fue un proceso largo en el Perú. Comenzó a tomar forma desde inicios de la década de los cincuenta, y se desarrolló parcialmente a través de diversas leyes y normas a lo largo de la década de los sesenta. En 1969, no obstante, el autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas dictaminó la que sería la Reforma Agraria más radical llevada a cabo en el país y en América Latina. Este proceso redistribuyó alrededor de 8 millones de hectáreas en el país y erradicó casi por completo el latifundio gamonal. En el presente documento, cuando empleamos el término Reforma Agraria, nos referimos a este proceso definitivo.

trabajadores de cada una de las empresas. La nueva era del minifundio estuvo marcada por un relevante -pero breve- período de bonanza gracias a la producción de espárrago blanco para la exportación. La gravísima crisis política y económica que azotaba al país a fines de los años ochenta, y las políticas de ajuste fiscal que se dictaminaron para superarla finiquitaron la emergente economía esparraguera (Minaya, 1995). Hacia inicios de los noventa, Virú y Chao mantenían su estatus de valles menores en La Libertad.

Esta posición relegada en el ámbito regional cambiaría radicalmente desde 1993 en adelante, a partir de la consolidación del giro neoliberal de la economía peruana y el desarrollo del boom agroindustrial contemporáneo.

A través de un nuevo marco normativo establecido por la Constitución de 1993, el Estado dictaminó la liberalización del mercado de tierras y la promoción de la inversión privada en los procesos de compra y adquisición de dicho activo (De los Ríos y Remy, 2012). Específicamente para el sector agropecuario, se elaboró y promulgó en 2000 la Ley 27360 de promoción del sector agrario. Esta normativa estableció, entre otros beneficios, reducir a la mitad el impuesto a la renta para empresas agroindustriales y crear un régimen laboral especial con derechos recortados para los trabajadores. De forma paralela, desde mediados de los años noventa, se llevaría adelante la construcción de mega proyectos de irrigación en la costa norte para la ampliación de la frontera agrícola en espacios eriazos. Finalmente, se desarrolló la arquitectura legal e institucional para la transferencia de las tierras habilitadas a precios subsidiados en favor de los agronegocios (Eguren et al., 2017). De esta manera, las condiciones para el retorno del latifundio fueron concretadas.

La provincia de Virú ha sido una de las sedes principales de la neoliberalización de la agricultura.

Las etapas I y II del Proyecto Especial de Irrigación Chavimochic³ (acrónimo de los valles Chao, Virú, Moche y Chicama) se desarrollaron en su ámbito territorial o adyacente, lo que transformó los otrora desérticos intervalles de los ríos Chao y Virú, y Virú y Moche en inmensas áreas de cultivo.⁴ Desde el inicio de sus operaciones en 1997 hasta 2015, Chavimochic logró habilitar alrededor de 20,000 ha nuevas en la provincia (Bourliaud y Eresue, 2015); su meta es ampliar esa cifra a más de 33,000 ha.

3 El Proyecto Especial Chavimochic es un sistema de irrigación que se extiende en gran parte de la costa del departamento de La Libertad, en la costa norte del Perú. Fue creado mediante la Ley 16667, el 21 de julio de 1967 a petición de parlamentarios liberteños. Chavimochic deriva las aguas del río Santa para irrigar los valles e intervalles de los ríos Chao, Virú, Moche y Chicama.

4 Las áreas intervalles no tuvieron ningún tipo de ocupación tradicional, dados los suelos desérticos, extremadamente arenosos y sin ningún tipo de acceso a riego que las caracterizaban. Esto marcó su condición de terreno eriazo y su adjudicación al Estado como único propietario.

Tabla 1. Comparación entre el régimen laboral general y el régimen laboral agrario

TIPO DE RÉGIMEN LABORAL	GENERAL	AGRARIO
Salario referencial* (A)	100 %	126.4 %**
Costos laborales “no salariales” a cargo del empleador (porcentaje adicional al salario referencial) (B)	51.7 %	8.2 %
Asignación familiar	10 %	-
Gratificaciones	17.3 %	-
Vacaciones	8.6 %	4.2 %
Seguro de salud	9.3 %	4 %
Compensación por tiempo de servicios (CTS)	3.8 %	-
Seguro de vida	0.6 %	-
Seguro complementario de riesgo de trabajo	1.3 %	-
Senati***	0.8 %	-
Costos laborales totales (C) = (A) + (B)	151.7 %	134.6 %

* Se toma como referencia la remuneración mensual promedio en el sector privado formal (100 %).

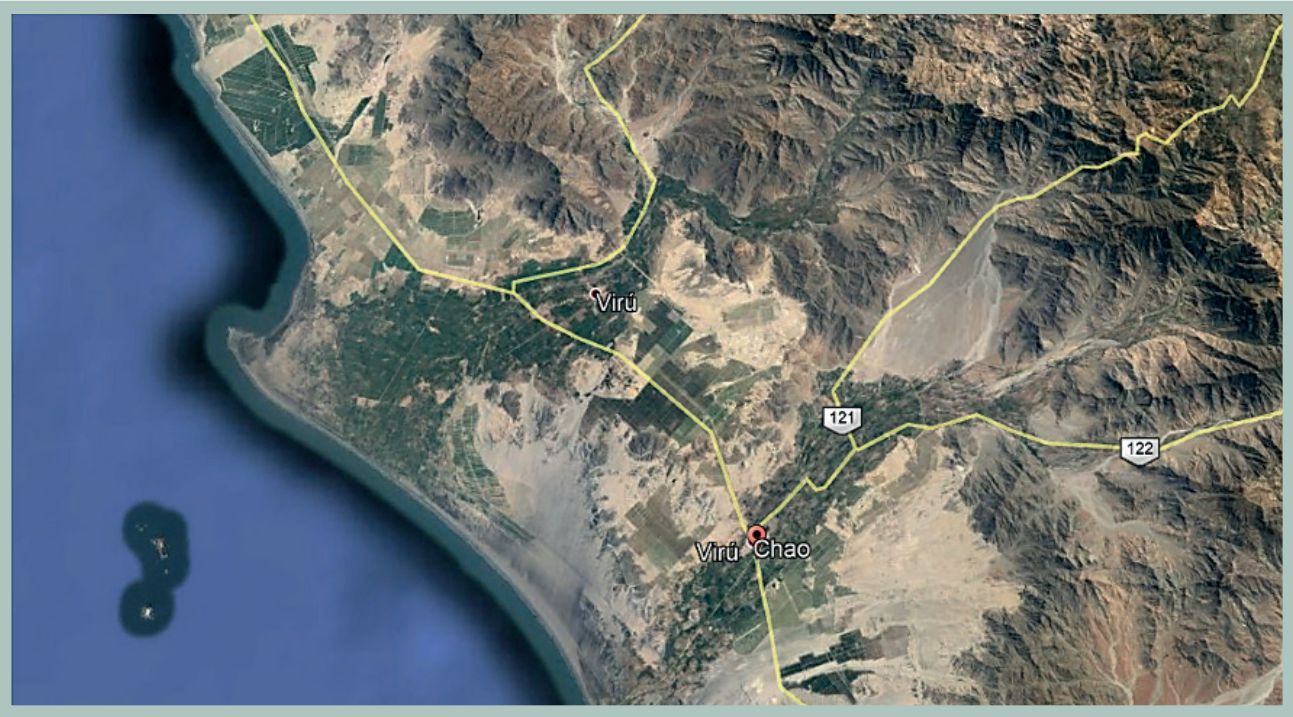
** El salario agrario incluye la compensación por tiempo de servicios y gratificaciones.

*** Se trata de una contribución al Servicio Nacional de Adiestramiento del Trabajo Industrial (Senati). A cambio de este aporte, Senati ofrece capacitaciones y programas de formación para trabajadores.

Fuente y elaboración: Trabajo Digno (2018).

Bajo diversos mecanismos de traspaso hacia privados, el nuevo espacio agrícola ganado fue concentrado exclusivamente por grandes y modernas empresas agroindustriales abocadas a la producción de cultivos no tradicionales -espárragos verdes, palta, arándanos- para la exportación, principalmente hacia Europa, EE. UU. y China. Su llegada reestructuró por completo la dinámica económica y territorial del valle. Por un lado, su importante y creciente demanda de fuerza de trabajo generó masivos movimientos migratorios desde la sierra y otras regiones del país hacia la provincia. Fue tan intenso el caudal que, entre 1993 y 2007, esta se constituyó como el mayor polo de atracción poblacional en La Libertad e, incluso, triplicó la tasa neta de migración de Trujillo, la capital (INEI, 2018). Por otro lado, los pequeños agricultores de los valles tradicionales fueron progresivamente articulados a sus cadenas productivas a través del régimen de agricultura de contrata, como parte de las estrategias de diversificación productiva y reducción de riesgos de las agroindustrias. Como consecuencia de ambos factores, en muy pocos años, Virú experimentó una radical expansión de sus espacios urbanos y una relevante transformación de las lógicas productivas de sus espacios agrícolas históricos.

Mapa 1. Provincia de Virú, departamento de La Libertad



Fuente: Google Earth.

3 DESIGUALDAD DE LA TIERRA Y EMERGENCIA DE UN NUEVO PROLETARIADO AGRÍCOLA

A diferencia de otros países de la región, como Argentina o Brasil, hasta hace pocos años, Perú no contaba con un segmento relevante de proletarios agrícolas. Estos prácticamente desaparecieron con la democratización de la propiedad de la tierra que tuvo lugar en el país tras la Reforma Agraria de 1969 y tras los posteriores procesos de parcelación individual de este recurso. Una de las novedades del boom agroindustrial contemporáneo es, precisamente, la emergencia y composición de un nuevo y creciente colectivo de asalariados agrícolas. La proletarianización agroindustrial tiene como particularidad el hecho de no ser originada por procesos de despojo de tierras (acumulación por desposesión), sino, más bien, por dos fenómenos en conjunto: primero, la crisis del minifundio y la actividad agropecuaria de pequeña escala en el país, y, segundo, las nuevas dinámicas de exclusión que se generan en territorios de influencia agroindustrial. Ilustramos este fenómeno a través del caso de Virú.

Según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), dentro del departamento de La Libertad, los pobladores migrantes que llegan a Virú provienen, mayoritariamente, de las provincias de la sierra, como Sánchez Carrión, Julcán y Otuzco (OIM, 2015). En el ámbito nacional, el INEI indica que Cajamarca -ubicado también en la sierra norte del país- es el departamento que más contribuye con la emigración hacia la provincia costeña (INEI, 2017). Aunque la movilización de jóvenes y adultos desde estos lugares hacia Virú y la costa liberteña ha sido recurrente en la historia, la magnitud de estos flujos es superlativa en la actualidad. Las variables comunes a estos territorios que expulsan a este gran contingente poblacional hacia Virú son su mayoritaria composición rural, y el dominio de las comunidades campesinas como formas de organización y tenencia de la tierra.

A pesar del alcance vastamente mayoritario de las comunidades campesinas en el territorio, en la actualidad, estas atraviesan una crisis importante a lo largo del país, debido, entre otras problemáticas, a la escasez de tierra para distribuir entre las nuevas generaciones de comuneros.

En Julcán, por ejemplo, donde habitan alrededor de 8,000 hogares rurales (INEI, 2017), las 8 comunidades existentes apenas son propietarias de poco más de 6,000 ha de tierra (IBC, 2016). A la problemática de la escasez se suma la precaria presencia del Estado en relación con el suministro de servicios básicos, y su mínimo o nulo apoyo a la pequeña actividad agropecuaria, la cual se halla en una profunda crisis.

Tomando nuevamente el ejemplo de Julcán, esta se halla entre las 20 provincias más pobres del Perú (INEI, 2018) y ocupa el último lugar en el ranking nacional del índice de desarrollo humano (PNUD, 2019). Todas estas condiciones son fuertes determinantes de la emigración de jóvenes y adultos desde el campo hacia espacios urbanos emergentes como Virú.

En la costa, sin embargo, la tierra tampoco es un activo disponible para estas familias. En comparación con la sierra liberteña o cajamarquina, el acceso a este recurso en Virú está organizado por el “libre” mercado. Por un lado, los terrenos eriazos habilitados por Chavimochic con la inversión del Estado fueron transferidos a grandes capitales privados mediante subastas, licitaciones y adjudicaciones directas orientadas a favorecer exclusivamente a dichas empresas. Para ello, se dispuso la transferencia de tierra en medianos y grandes lotes: entre 2004 y 2010, el área promedio subastada fue de más de 2,000 ha. Así mismo, se establecieron compromisos de inversión mínimos, que llegaron a ser superiores a los USD 2,500 por hectárea en el mismo período (Chavimochiv, s. f.). Ante la imposibilidad de competir en este mercado de tierras organizado por el Estado, tanto los productores locales como los migrantes sin tierra quedaron absolutamente excluidos del acceso a estas nuevas áreas productivas.

Por el otro lado, en los espacios agrícolas tradicionales de la provincia, de predominante estructura minifundista, el mercado de tierras también es excluyente. A partir del estudio de caso del centro poblado Santa Elena, una de las principales localidades de pequeños agricultores en Virú, Araujo (2018) evidencia que la articulación de la comunidad a las cadenas productivas agroindustriales y la bonanza generada por la nueva agricultura de contrata han impulsado el desarrollo de un activo mercado de arriendo de la tierra. El alto nivel de demanda por este recurso, no obstante, incrementó aceleradamente el valor de la tierra. En 2016, el precio de alquiler alcanzó los S/ 5,000 por hectárea; el de venta, los USD 35,000 por hectárea. Cabe anotar que este valor no se correlaciona con la capacidad productiva de este recurso. Marshall (2008) demuestra que la intensificación y expansión del monocultivo en los espacios agrícolas tradicionales de los valles de Virú y Chao han perjudicado tremendamente la calidad de los suelos, afectados ahora por la extrema salinización y contaminación.

En esta dinámica de costos crecientes y rentabilidades menores por hectárea de tierra, se establece una nueva desigualdad, en la que solo la pequeña burguesía rural dispone de capital para acceder a la tierra y hacerla producir asumiendo los riesgos mencionados; por su parte, los migrantes y las nuevas generaciones de familias quedan nuevamente al margen (Araujo, 2018).

De este modo, las oportunidades de desarrollo de las familias migrantes se restringen al trabajo asalariado en las agroindustrias: en sus territorios, están vetadas del acceso a la tierra por ser un recurso escaso; en la costa, están excluidas de los mercados de tierra regulados por el Estado e impactados por las agroindustrias. Estos factores convierten a los miembros de dichas familias, estrictamente, en los nuevos proletarios agrícolas de los latifundios contemporáneos.

4 TRANSFORMACIONES DEMOGRÁFICAS EN TERRITORIOS AGROINDUSTRIALES

La relevancia de la población agropecuaria

A diferencia de la tendencia nacional, en Virú, la actividad agropecuaria continúa teniendo una gran relevancia y se ha consolidado como la principal fuente de empleo para la población de la provincia.

Mientras que en el país el peso de la PEA agropecuaria disminuyó entre 2007 y 2017, en Virú la tendencia fue contraria: en 2017, la actividad agropecuaria daba empleo a 1 de cada 4 personas, y su participación en la PEA provincial fue vastamente mayoritaria -alrededor del 60 %-.

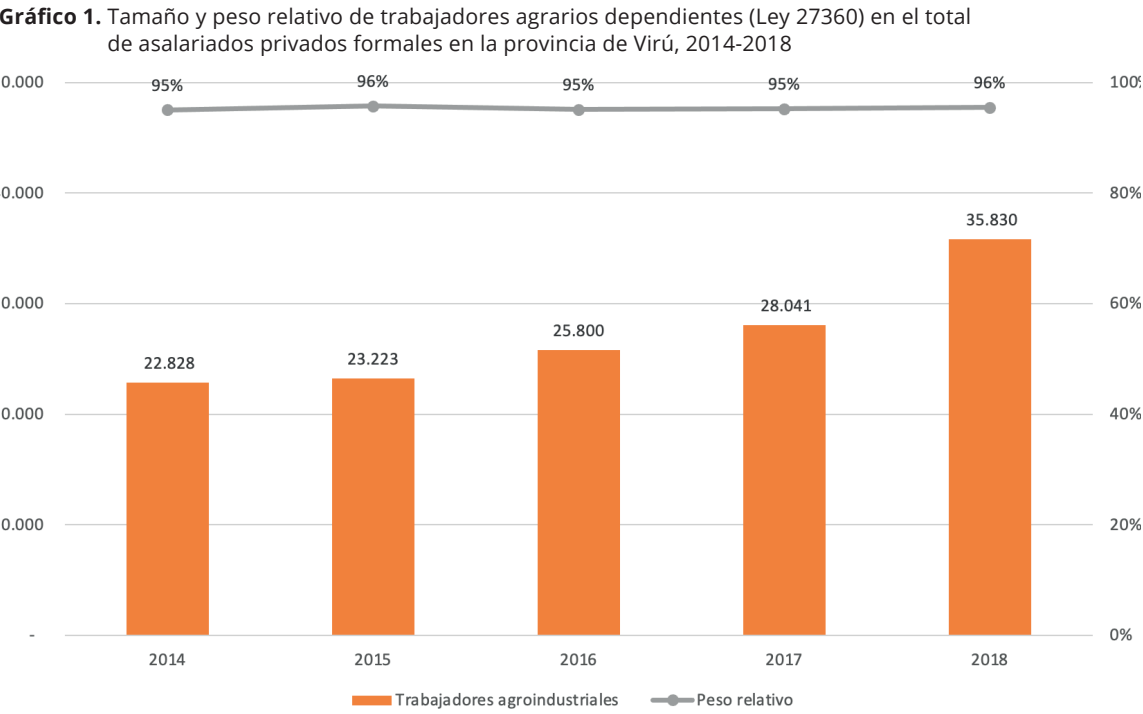
Tabla 2. Evolución de la población total, PEA y agropecuaria nacional y de la provincial de Virú, 2007 y 2017

Año	NACIONAL		VIRÚ	
	2007	2017	2007	2017
Población agropecuaria*	2'384,973	2'550,630	16,368	23,232
Porcentaje de la población agropecuaria dentro del total nacional	9 %	8 %	21 %	24 %
Porcentaje de la población agropecuaria dentro de la PEA	22 %	15 %	52 %	61 %

* Población ocupada en agricultura, ganadería, caza y silvicultura.
Fuente: INEI (2007 y 2017). Elaboración propia.

Los datos provistos por el MTPE nos permiten inferir que el progresivo protagonismo de la rama agropecuaria en la provincia está determinado, principalmente, por la gran dinámica de la actividad agroindustrial. En el gráfico 1, se observa que los trabajadores agrarios dependientes bajo el régimen de la Ley 27360 componen casi por entero el conjunto de trabajadores asalariados formales en el sector privado de la provincia: de manera sostenida, entre 2014 y 2018, han representado el 95 % o más. Esto se produce gracias a una sólida tasa de crecimiento anual de 12 % en ese período, una ratio de incremento marcadamente superior al de la población agropecuaria a nivel nacional y provincial.

Lamentablemente, debido al subregistro de los censos de población, no es posible determinar qué proporción de la PEA agropecuaria representan los trabajadores agroindustriales: en 2017, la cantidad de asalariados de agroindustrias inscritos en las planillas de las empresas, 28,041, superó el total de la PEA agropecuaria provincial, 23,232. De manera general, podemos inferir que los primeros conforman un segmento ampliamente mayoritario del conjunto agropecuario en Virú.



Fuente: MTPE (2014-2018). Elaboración propia.

Género

La evolución de la distribución según el género de la población agropecuaria en la provincia evidencia un proceso de feminización moderadamente superior al nacional. En efecto, aunque existe una tendencia al incremento de la participación de las mujeres en ambos niveles, en Virú fue más pronunciado.

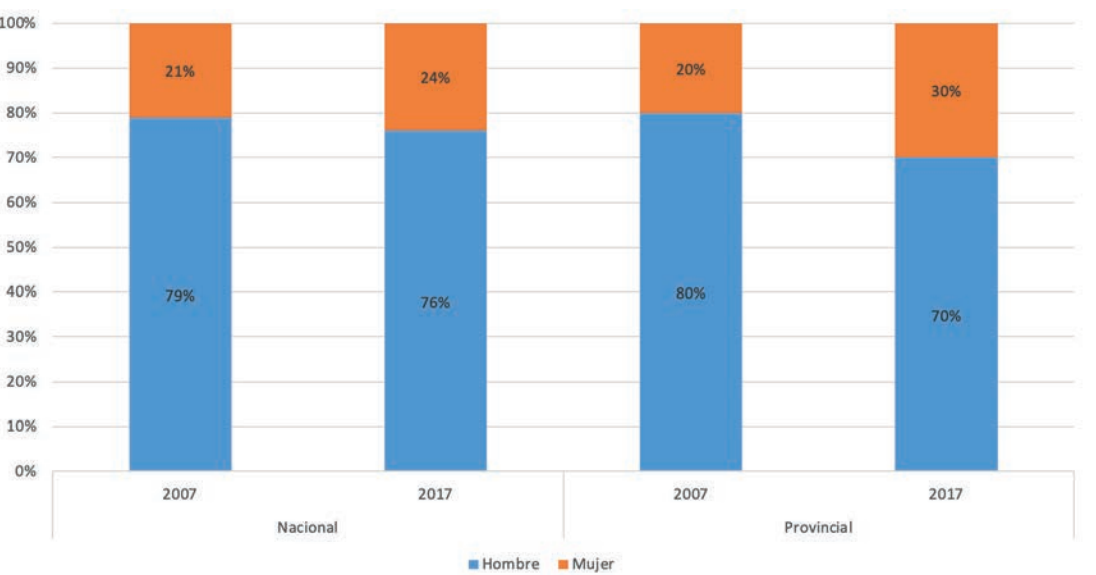
Las mujeres pasaron de ser un quinto a un tercio (30 %) de la población agropecuaria en el período 2007-2017. Así mismo, la razón entre mujeres y hombres también creció diferenciadamente en la provincia: en 2017, por cada 100 hombres empleados en esta rama, había 43 mujeres.

Nuevamente, es posible inferir que la actividad agroindustrial es uno de los *drivers* o “disparadores” de la feminización de la población agropecuaria en Virú. En el gráfico 3, se observa que, solo entre 2014 y 2018, la participación de las mujeres en el proletariado agroindustrial se elevó a cerca del 40 %. Además, en el mismo período, el índice de feminidad alcanzó la razón de cerca de 70 mujeres por cada 100 varones empleados por las agroindustrias.

Podemos asociar la creciente demanda de mano de obra femenina a la expansión de cultivos de mayor intensidad en el uso de fuerza de trabajo, como las frutas, y específicamente a la ampliación de labores de baja calificación y de menor esfuerzo físico. La cosecha de arándano azul, que requiere una gran cantidad de trabajadores por un semestre consecutivo, es un gran ejemplo.

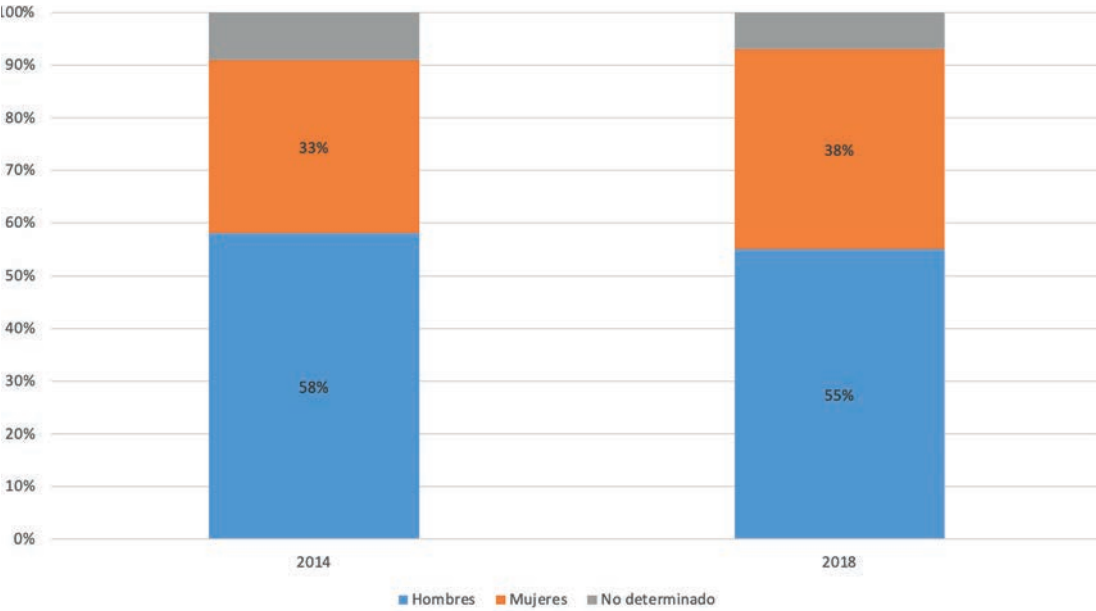
Como veremos en secciones posteriores, la apertura del mercado de trabajo a las mujeres ha venido de la mano también con la generación de un segmento de mayor precariedad laboral.

Gráfico 2. Distribución según género de la población empleada en la actividad agropecuaria a nivel nacional y en la provincia de Virú, 2007 y 2017



Fuente: INEI (2007-2017). Elaboración propia.

Gráfico 3. Distribución según género de trabajadores agrarios dependientes en la provincia de Virú, 2014 y 2018



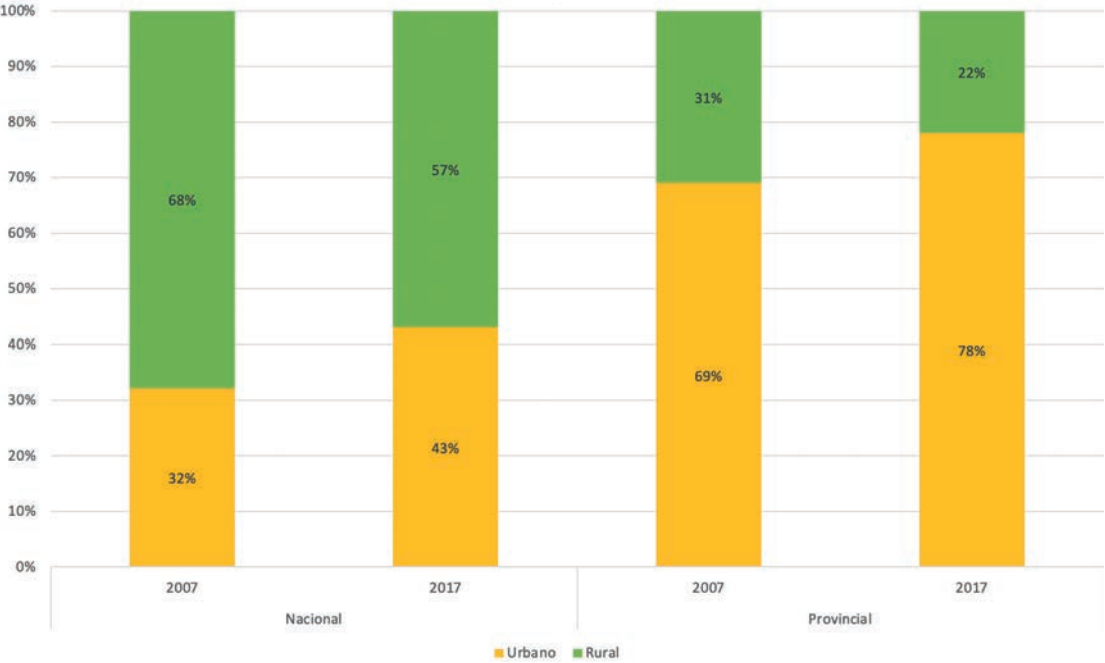
Fuente: MTPE (2014 y 2018). Elaboración propia.

Tipo de área de residencia

Una tercera característica demográfica por la que se destaca Virú es el carácter eminentemente urbano de su población agropecuaria. Aunque a nivel nacional se evidencia un importante proceso de urbanización entre 2007 y 2017, el conjunto ocupado en la actividad agropecuaria aún es mayoritariamente rural: 60 %. Por el contrario, a nivel provincial, el predominio del segmento urbano en la población agropecuaria es evidente: aumentó su representación de 69 % a cerca del 80 % entre 2007 y 2017 en detrimento del segmento rural, que redujo su participación hasta casi el 20 %.

Es posible suponer que el fenómeno agroindustrial ha sido el determinante de esta progresiva urbanización, dado el gran volumen de trabajadores agrícolas sin acceso a tierra -locales y migrantes- que los agronegocios emplean y que suelen residir en asentamientos urbanos.

Gráfico 4. Distribución según tipo de área de la población empleada en la actividad agropecuaria a nivel nacional y provincial Virú



Fuente: INEI (2007-2017). Elaboración propia.

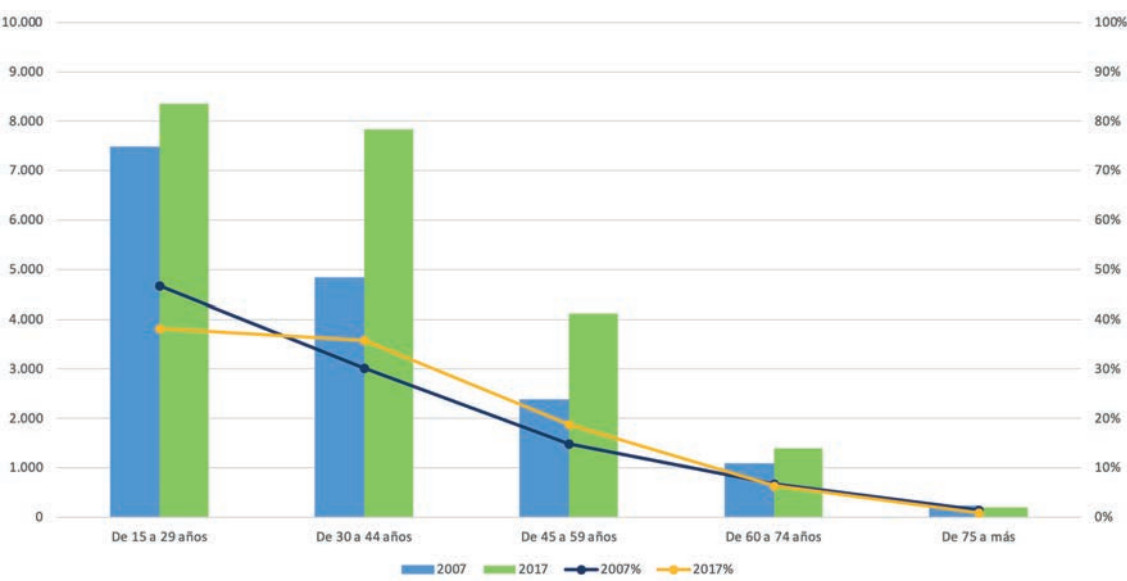
Grupos de edad

La población agropecuaria de la provincia de Virú se caracteriza, además, por ser generacionalmente juvenil. A nivel nacional, el tamaño y peso relativo del segmento joven (de 15 a 29 años) en la actividad agropecuaria ha caído dramáticamente en el período 2007-2017 (Trivelli y Urrutia, 2019), debido principalmente a la migración laboral hacia ciudades intermedias y capitales. En cambio, en la provincia analizada, el volumen de jóvenes y adultos jóvenes (de 30 a 44 años) que trabajan en este rubro se ha incrementado significativamente. De este modo, en 2017, los jóvenes y adultos jóvenes representaban, juntos, cerca del 80 % de la población agropecuaria de Virú, seguidos de los adultos consolidados (de 45 a 59 años), que representaban cerca del 20 %.

Una mirada a la distribución etaria de los trabajadores agrarios dependientes permite identificar que la extendida juventud de la población agropecuaria provincial tiene que ver, también esta vez, con la actividad agroindustrial. **Como se observa en el gráfico 5, en 2018, cerca del 50 % de proletarios agroindustriales es joven, y un poco más del 40 % está en el rango de adultos jóvenes.** Menos del 10 %, en cambio, se ubican en la categoría de adultos consolidados y mayores; por ello, inferimos que estos participan de la actividad agropecuaria más bien como productores o trabajadores agrícolas independientes.

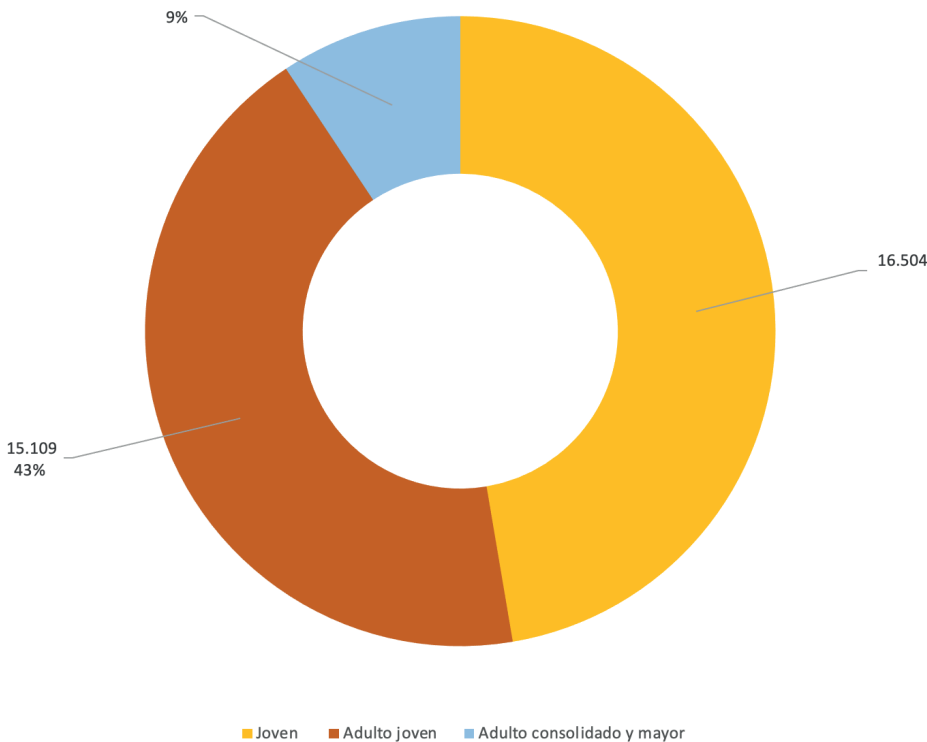
Las implicancias de esta composición etaria del proletariado agroindustrial son altamente relevantes para la dinámica económica y social de la provincia. Esto se debe a la especial vulnerabilidad del segmento de jóvenes y a los desafíos que se derivan del difícil proceso de independización económica y conformación de sus propias familias. Así, por un lado, es común que las unidades domésticas compuestas por jóvenes tengan hijos en edad infantil; ello requiere que gran parte de los ingresos y del tiempo en casa deba ser invertido en actividades de cuidado. Por el otro, durante esta etapa, las familias jóvenes suelen invertir en sus activos básicos: la adquisición de un terreno, la construcción inicial de sus viviendas, el equipamiento de sus hogares, entre otros.

Gráfico 5. Distribución etaria de la población agropecuaria de la provincia de Virú, 2007 y 2017



Fuente: INEI (2007-2017). Elaboración propia.

Gráfico 6. Distribución etaria de los trabajadores agrarios dependientes (Ley 27360) de la provincia de Virú, 2018



Fuente: MTPE (2014 y 2018). Elaboración propia.

Migración

Finalmente, la población agropecuaria de la provincia está compuesta casi en su totalidad por migrantes. Los inmigrantes antiguos son la base mayoritaria de este segmento, al representar aproximadamente el 60 %: son las personas que migraron en su infancia o juventud, y que residen por más de 5 años en la provincia. Podemos inferir que el origen de esta migración está vinculado al desarrollo de la agricultura comercial y las agroindustrias esparagueras durante la década de los noventa, pero también al comienzo del boom agroindustrial a inicios de 2000. Le siguen los inmigrantes recientes, quienes se establecieron en Virú hasta 5 años antes de cada registro censal: entre 2002 y 2007, y entre 2012 y 2017. Estos representaban cerca de un quinto de la población agropecuaria en 2017, y su origen está estrictamente asociado a la actividad agroindustrial contemporánea. Por último, los migrantes estacionales, quienes se movilizan durante ciertos meses del año a la provincia, representan apenas el 5 % de la población agropecuaria. A pesar de que entre 2007 y 2017 el peso relativo del segmento migrante en su conjunto ha disminuido, este mantuvo una representación de más del 80 % del total de la población agropecuaria en 2017. Esta es una composición opuesta a la de la población agropecuaria nacional, en la que el segmento migrante apenas se acerca al 40 %.

Cabe resaltar el carácter estable y permanente de la inmigración que arriba a Virú, donde, aparentemente, las mujeres y hombres llegan para quedarse.

Es muy posible, no obstante, que exista un subregistro de la cantidad de migrantes estacionales, dadas las limitaciones del instrumento censal -aplicado en una fecha específica del año- para mapear en detalle la dinámica de movilidad.

Hallamos una pista de este subregistro en la tabla 1 y el gráfico 1, en los que se observa que, en 2017, la cantidad de asalariados registrados en las planillas electrónicas de las empresas agroindustriales (28,041) supera por miles la cantidad de población agropecuaria registrada por el censo poblacional (23,232) en el mismo año. Si sumáramos el excedente de trabajadores no contabilizados al conjunto de migrantes estacionales, su proporción superaría el 20 % de la población agropecuaria (1 de cada 5 personas).

Tabla 3. Proporción de los diferentes tipos de segmentos migrantes en la población agropecuaria de Virú

Año	NACIONAL		VIRÚ		
	2007	2017	2007	2017	2017*
Migrantes estacionales	3 %	2 %	5 %	5 %	21 %
Migrantes recientes	8 %	7 %	24 %	19 %	15 %
Migrantes antiguos	26 %	27 %	61 %	59 %	49 %
Total de migrantes	37 %	36 %	90 %	83 %	85 %

* Incluye el excedente de trabajadores agroindustriales en las planillas electrónicas como parte del segmento migrante, específicamente bajo la categoría de “migrantes estacionales”.

Fuente: INEI (2007-2017). Elaboración propia.

5 EL MERCADO DE TRABAJO AGROINDUSTRIAL EN VIRÚ

Informalidad versus formalidad

A diferencia del trabajo asalariado generado por la agricultura familiar, el empleo que produce la actividad agroindustrial se distingue por su carácter formal. Gracias a la cantidad de empleo formal creado por estas empresas, el peso relativo del segmento informal en el conjunto de asalariados agrícolas es menor en provincias de influencia agroindustrial, como Virú, que a nivel nacional. Por ello, mientras en el país la tasa de informalidad de los asalariados agrícolas se mantuvo por encima del 80 % entre 2007 y 2018, en el departamento de La Libertad la proporción de informales en el agro bajó de 81 % en 2007 a 60 % en 2018. En el mismo período, no obstante, el tamaño del segmento informal en la región creció a una tasa moderadamente mayor que la nacional: en 2018, se lograron generar alrededor de 50,000 empleos informales en agricultura.

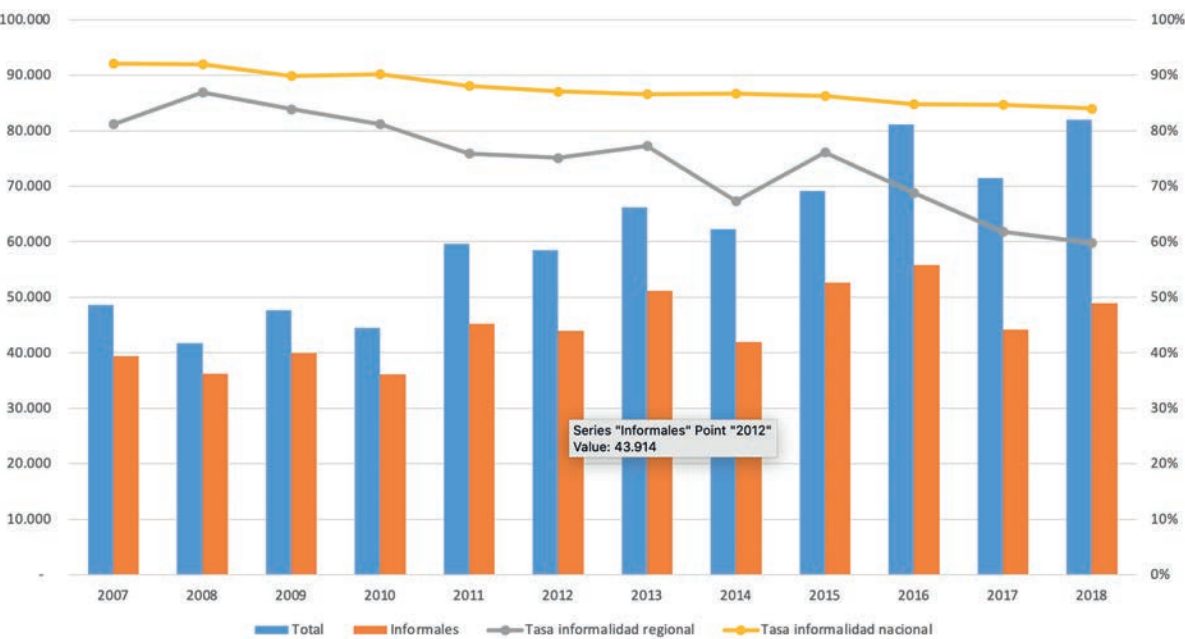
De lo anterior, podemos inferir que, aunque el crecimiento de la actividad agroindustrial se sustenta, principalmente, en la ampliación de la base de asalariados formales, esta también abona, en proporciones menores, al incremento de la informalidad en el agro.⁵

Gracias a los datos sobre los procesos de formalización laboral que lleva a cabo Sunafil en Virú y en otras provincias de influencia agroindustrial, tenemos elementos suficientes para suponer que la mayor parte del trabajo informal se genera durante la temporada de cosecha, pico de uso de fuerza de trabajo. **Podemos determinar, además, que la informalidad afecta de manera diferenciada a dos segmentos de trabajadores: a los migrantes estacionales que se movilizan para dicha temporada, y a las mujeres.** Sobre este tema, la ENAHO evidencia que la tasa de informalidad en las mujeres fue moderadamente mayor a la de los hombres: en 2018, alcanzó al 64 % de las primeras y al 59 % de los segundos.



5 Esto es corroborado por las noticias de acciones de formalización laboral de trabajadores agroindustriales que la Sunafil ha realizado en la región, especialmente en temporada de cosecha. Véase el siguiente enlace: <https://www.sunafil.gob.pe/noticias/item/7543-sunafil-complementa-acciones-de-formalizacion-laboral-con-la-prevencion-de-accidentes-de-trabajo-en-el-sector-agroindustrial-y-agrario.html>

Gráfico 7. Tamaño y peso relativo de asalariados agrícolas informales del departamento La Libertad, 2007-2018



Fuente: ENAHO (2007-2018). Elaboración propia.

Tabla 4. Tasa de crecimiento anual de asalariados agrícolas

	TOTAL DE ASALARIADOS	INFORMALES
Nacional	2.3 %	1.4 %
La Libertad	4.9 %	2.0 %

Fuente: ENAHO (2007-2018). Elaboración propia.

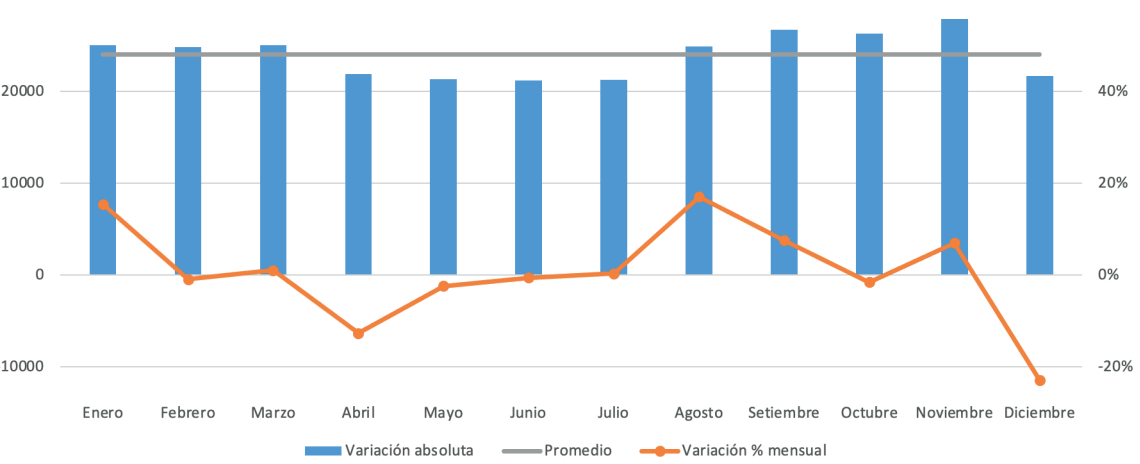
Demanda de mano de obra

Ahora bien ¿cómo opera y cómo se ha transformado este mercado “formal” de empleo en Virú? Solo entre 2014 y 2018, se observan cambios importantes en su dinámica. Podemos inferir que estos se explican por el posicionamiento y consolidación del arándano azul como producto de exportación principal de estas empresas. Así, un primer cambio evidente es la variación en los períodos pico de demanda de mano de obra. El primer trimestre (enero, febrero y marzo) y el último cuatrimestre de 2014 (agosto, setiembre, octubre y noviembre) fueron los meses en los que la contratación formal de asalariados superó el promedio. En 2018, en cambio, el pico de demanda de fuerza de trabajo se extendió a lo largo del último semestre del año (de agosto a diciembre) para la cosecha de arándano. En contraparte, es notoria su reducción durante el primer semestre (enero a julio), cuando la misma plantación está en proceso de postcosecha y floración.

Una segunda transformación evidente es el nivel de variabilidad de la demanda de mano de obra de la agroindustria a lo largo del año. Los gráficos muestran, primero, que, en 2018, la frecuencia mensual de asalariados contratados es mucho mayor que su promedio. Como consecuencia, la variación porcentual mensual en la cantidad de asalariados muestra curvas de crecimiento o reducción más pronunciadas. El coeficiente de variación sintetiza este patrón: pasó del 10 % en 2014 al 27 % en 2018 (véase la tabla 5).

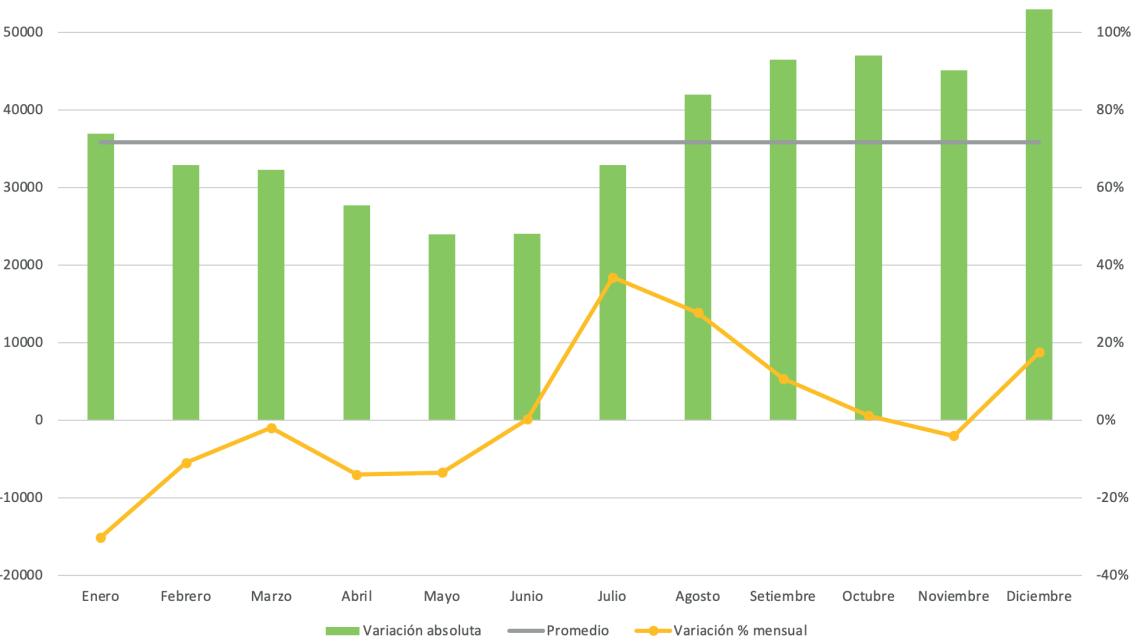
Así, aunque la masificación del cultivo del arándano azul, junto con otros procesos relativos a la producción y al crecimiento de las agroindustrias, ha determinado una expansión importante del mercado de empleo agroindustrial, ha significado también el deterioro de su estabilidad. Hay bastante más trabajo, pero es mucho más intermitente de lo que ya era hace 4 años.

Gráfico 8. Variación absoluta y porcentual de los asalariados privados en la provincia de Virú, 2014



Fuente: MTPE (2014). Elaboración propia.

Gráfico 9. Variación absoluta y porcentual de los asalariados agrícolas privados en la provincia de Virú, 2018



Fuente: MTPE (2018). Elaboración propia.

La creciente intermitencia de la demanda de trabajo agroindustrial ha impactado de forma homogénea el empleo específico de hombres y mujeres: el coeficiente de variación de asalariados y asalariadas empleadas en las agroindustrias se incrementó en alrededor de 15 % para cada sexo entre 2014 y 2018.

Sin embargo, si se comparan, es evidente que la demanda de mano de obra femenina es más variable que la de varones; ello implica que las trabajadoras agroindustriales sufren de mayor inestabilidad laboral a lo largo del año.

De este modo, tanto en 2014 como en 2018, el coeficiente de variación de la fuerza de trabajo femenina contratada fue superior en 5 % o más al de los varones. De manera detallada, como se observa en el gráfico 10, el porcentaje de mano de obra femenina contratada experimenta variaciones mayores en los picos de reducción o alza de demanda de trabajadores. Específicamente en el caso de la producción de arándano, podemos inferir que estas son contratadas en masa para la temporada de cosecha, cuando se requiere un gran volumen de mano de obra; sin embargo, son despedidas o puestas en “descanso temporal” en mayor número para la época de labores de postcosecha, mantenimiento (aporque, abonamiento, fumigación) y floración (poda).

Gráfico 10. Variación porcentual de los asalariados agrícolas privados en la provincia de Virú según sexo, 2018



Fuente: MTPE (2018). Elaboración propia.

Tabla 5. Coeficiente de variación de asalariados privados agrícolas en la provincia de Virú, 2014 y 2018

	2014	2018
Hombre	9 %	23 %
Mujer	14 %	30 %
Total	10 %	27 %

Fuente: MTPE (2014 y 2018). Elaboración propia.

Régimen de contratación

Ante la elevada variabilidad de la demanda de fuerza de trabajo, el régimen de contratación utilizado en la mayor parte de casos es el de contrato a plazo fijo, denominado también sujeto a modalidad. Estos contratos pueden entablarse cuando así lo requiera la empresa ante diferentes necesidades o escenarios específicos que tienen un carácter temporal o accidental; en consecuencia, no proveen de estabilidad laboral a los trabajadores y trabajadoras, ni de los derechos que se derivan de esta. La vasta mayoría -más del 80 %- de los asalariados agroindustriales trabaja bajo contratación a plazo fijo o temporal, y el contrato de tipo intermitente es la modalidad más utilizada. Solo una minoría cada vez menos representativa labora bajo contratos a plazo indeterminado o estables: 8 % en 2018. Finalmente, llama la atención que, a pesar de su proporción también minoritaria, 6 %, la cantidad de trabajadores bajo el régimen especial de exportación no tradicional se ha incrementado significativamente -casi triplicado- entre 2014 y 2018.

A diferencia de la contratación temporal regular, el régimen especial de exportación no tradicional permite los contratos temporales con renovación indefinida a las empresas que exporten el 40 % del valor de su producción.

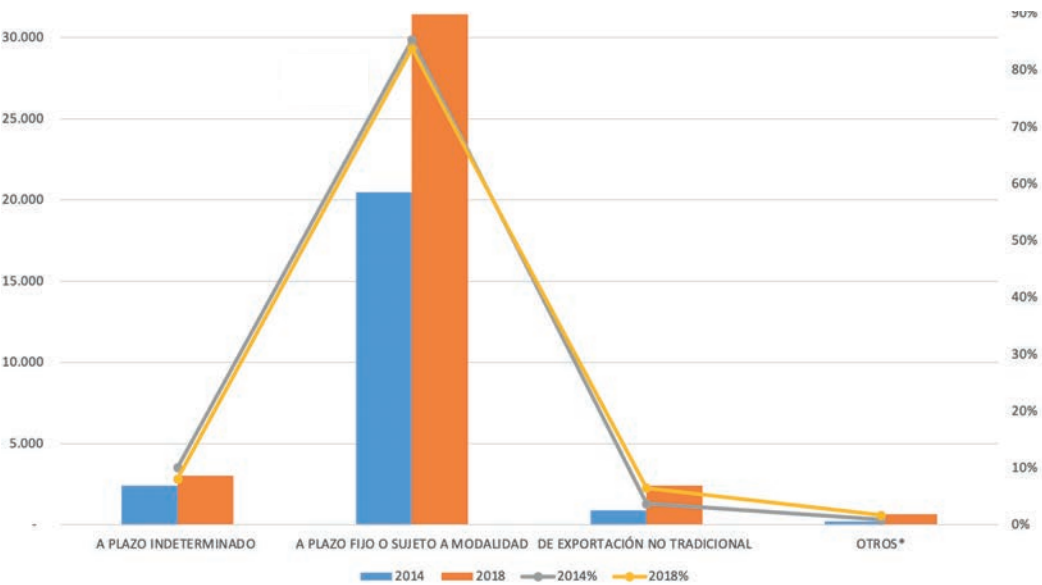
Como lo señala la evidencia, es recurrente que el régimen de exportación no tradicional sea desnaturalizado para mantener en una situación de inestabilidad y recorte de derechos a trabajadores que laboran por más de 5 años (60 meses).⁶

Existe la posibilidad de que, ante el aumento de la cantidad de empleados que superan dicho tiempo de servicio, las empresas agroindustriales se vean tentadas a utilizar cada vez más el mencionado régimen para evitar contratar de manera estable a un segmento de su mano de obra.

Podemos suponer que son los obreros -categoría ocupacional definida por el uso predominante de fuerza física, en la que se ubica casi la totalidad de los trabajadores agroindustriales (más del 90 % en 2018)- quienes están sujetos a las diferentes modalidades de contratación a plazo fijo. En contraste, según es posible inferir, la minoría (8 %), que ejerce labores de dirección u ocupaciones que demandan más esfuerzos intelectuales -ejecutivos y empleados-, se encuentra bajo el régimen de contratación estable.

6 El plazo máximo para utilizar los contratos a plazo fijo o sujetos a modalidad es de 5 años o 12 meses según el Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral.

Gráfico 11. Variación absoluta y porcentual de los asalariados agrícolas privados en la provincia de Virú, 2014 y 2018



Fuente: MTPE (2014 y 2018). Elaboración propia.

A nivel de género, la distribución de varones y mujeres asalariadas en las agroindustrias entre los regímenes de contratación mencionados es similar al patrón general ya inicialmente examinado. Cabe señalar, no obstante, que la proporción de trabajadoras con contratos a plazo indeterminado es levemente inferior a la de varones. Esto indicaría, como se evidencia en la tabla 6, que, además de la gran intermitencia a la que están sujetas las asalariadas agroindustriales, tienen un acceso menor a posiciones de contratación estable y de mayor calificación, como los puestos de ejecutivos o empleados.

Tabla 6. Distribución de hombres y mujeres asalariadas privadas según tipo de contrato y categoría ocupacional en Virú, 2018

TIPO DE CONTRATO	HOMBRE	MUJER
Porcentaje plazo indeterminado	10 %	6 %
Porcentaje plazo fijo y exportaciones no tradicionales	88 %	92 %
Porcentaje otros*	2 %	2 %
Categoría ocupacional		
Empleado/a o ejecutivo/a	7 %	5 %
Obrero/a	93 %	95 %

* A tiempo parcial, del extranjero, Decreto Legislativo 689, Ley Agraria 27360, migrante andino, otros no previstos.

Fuente: MTPE (2018). Elaboración propia.

EL RÉGIMEN LABORAL AGROINDUSTRIAL: LA FORMALIZACIÓN DE LA PRECARIEDAD

Remuneraciones

Respecto de las remuneraciones, observamos una evolución muy leve y lenta del salario bruto mensual de los trabajadores agroindustriales. Se incrementó en un poco más de S/ 200 en el período 2014-2018, gracias no solo a la dinámica del mercado de trabajo, sino también al aumento de la remuneración mínima vital (RMV) dictaminado por el Estado. No obstante, si incorporamos al análisis la inflación anual de precios, hallamos que, solo en 2017, el incremento de la remuneración de los trabajadores superó la tasa inflacionaria y representó un alza sensible en su retribución: S/ 63 adicionales. En cambio, en 2015, 2016 y 2017, la situación fue diferente: los trabajadores apenas experimentaron un muy leve incremento o incluso vieron reducido su poder adquisitivo a pesar de tener un salario nominalmente mayor.

Si consideramos que, en promedio, los trabajadores agroindustriales de regular estabilidad se emplean 8.4 meses al año (Velazco et al., 2015), estos habrían acumulado alrededor de S/ 10,777 en 2018 u S/ 898 mensuales, cifra por debajo de la remuneración mínima vital, de S/ 930 mensuales desde abril de 2018.

Tabla 7. Evolución de la remuneración de trabajadores agrarios dependientes, 2014-2018

AÑO	REMUNERACIÓN PROMEDIO	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA REMUNERACIÓN	INFLACIÓN AL FIN DEL PERÍODO (PORCENTAJE)	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA REMUNERACIÓN REAL**	REMUNERACIÓN REAL	INCREMENTO EN RMV
2014	S/ 1,195					
2015	S/ 1,239	3.8 %	4.4 %	-0.6 %	S/ 1,187	
2016*	S/ 1,248	3.8 %	3.2 %	0.6 %	S/ 1,195	+ S/ 100 desde mayo
2017*	S/ 1,355	6.3 %	1.4 %	4.9 %	S/ 1,258	
2018*	S/ 1,427	4.3 %	2.5 %	1.8 %	S/ 1,283	+ S/ 80 desde abril

* No se incluyeron los registros “sin información” o no determinados de la base de datos.
** Calculada restando la inflación de cada período a la variación de la remuneración nominal.

Fuente: MTPE (2014-2018). Elaboración propia.

En todos los años registrados, las trabajadoras recibieron un salario menor -alrededor de S/ 300 menos- que el promedio bruto mensual obtenido por los hombres.

Ello se debe, generalmente, a que se les asigna tareas de menor intensidad física o especialización técnica, retribuidas con salarios inferiores o no sujetas a los sistemas de bonificación que algunas empresas emplean. Otras labores mejor pagadas, como el riego o las fumigaciones a máquina, suelen ser exclusivamente asignadas a trabajadores hombres. Cuando las mujeres sí participan en labores por las que pueden obtener bonos salariales -durante la temporada de cosecha de arándano, por ejemplo- es común que su rendimiento sea inferior al de los hombres, lo que, nuevamente, se ve reflejado en una menor retribución. Por último, si consideramos que su estabilidad laboral es todavía más precaria que la de sus pares hombres, podemos deducir que los ingresos que generan a lo largo del año por la actividad agroindustrial es también inferior.

Tabla 8. Remuneración mensual promedio de asalariados agrícolas hombres en la provincia de Virú

AÑO	REMUNERACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA REMUNERACIÓN	INFLACIÓN AL FIN DEL PERÍODO	VARIACIÓN PORCENTUAL REAL DE LA REMUNERACIÓN	REMUNERACIÓN REAL
2016	S/ 1,443				
2017	S/ 1,530	6 %	1.4 %	4.6 %	S/ 1,513
2018	S/ 1,607	5 %	2.5 %	2.5 %	S/ 1,558

Fuente: MTPE (2016-2018). Elaboración propia.

Tabla 9. Remuneración mensual promedio de asalariadas agrícolas mujeres en la provincia de Virú

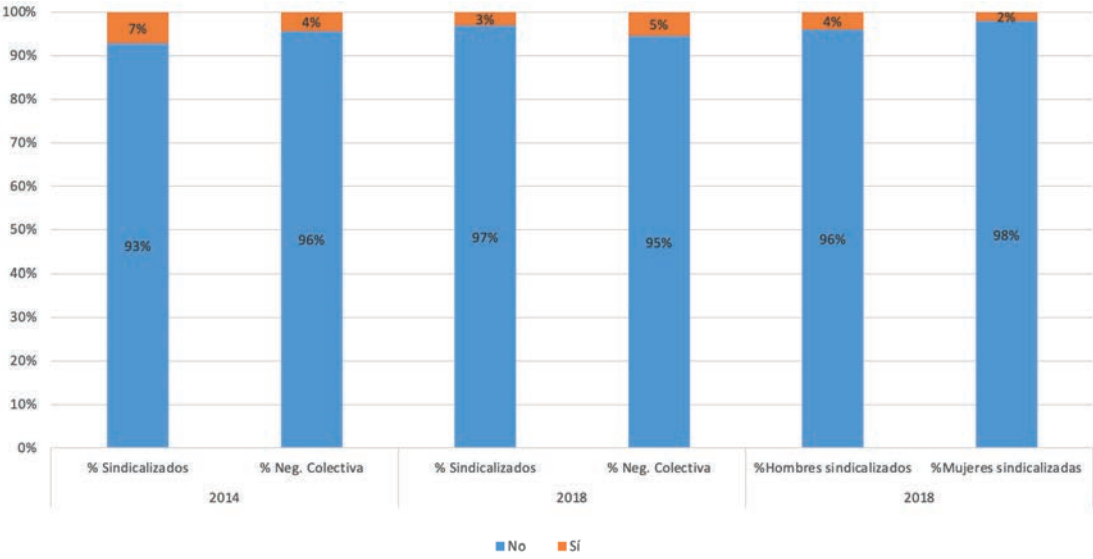
AÑO	REMUNERACIÓN	VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA REMUNERACIÓN	INFLACIÓN AL FIN DEL PERÍODO	VARIACIÓN PORCENTUAL REAL DE LA REMUNERACIÓN	REMUNERACIÓN REAL
2016	S/ 1,132				
2017	S/ 1,207	6.6 %	1.4 %	5.2 %	S/ 1,191
2018	S/ 1,247	3.3 %	2.5 %	0.8 %	S/ 1,213

Fuente: MTPE (2016-2018). Elaboración propia.

Sindicalización y negociación colectiva

El derecho a la sindicalización, por su parte, se ha visto seriamente afectado por las transformaciones que atraviesa el mercado de trabajo agroindustrial. Como lo han demostrado diferentes etnografías y reportes periodísticos de casos, las dinámicas laborales al interior de las agroindustrias están marcadas por fuertes jerarquías, y relaciones autoritarias y de control sobre los obreros, quienes sufren una permanente amenaza de despido ante cualquier acción o práctica contraria al régimen de las empresas (Paucar, 2019). Como consecuencia de esta cultura institucional, sumada a la reducida estabilidad del grueso de los trabajadores, los niveles de sindicalización han sido históricamente muy bajos (Gamero, 2012). En el caso de Virú, la creciente inestabilidad laboral en la que se mantiene a los asalariados agroindustriales, así como el uso de regímenes que expresamente restringen el derecho a la sindicalización -como el régimen de exportación no tradicional-, ha profundizado la problemática.

Gráfico 12. Evolución porcentual de la sindicalización y participación en negociaciones colectivas de asalariados privados de la provincia de Virú, 2014 y 2018



Fuente: MTPE (2014 y 2018). Elaboración propia.

En efecto, entre 2014 y 2018, la proporción de asalariados privados sindicalizados en la provincia se redujo a menos de la mitad: pasó a ser solo el 3 % al finalizar el período.

En relación con el género, las trabajadoras mujeres tuvieron una representación incluso menor en el conjunto sindicalizado, 2 % en 2018; ello se explica por la mayor estacionalidad de su mano de obra. Podemos inferir que esta problemática se replica para el conjunto de migrantes estacionales.

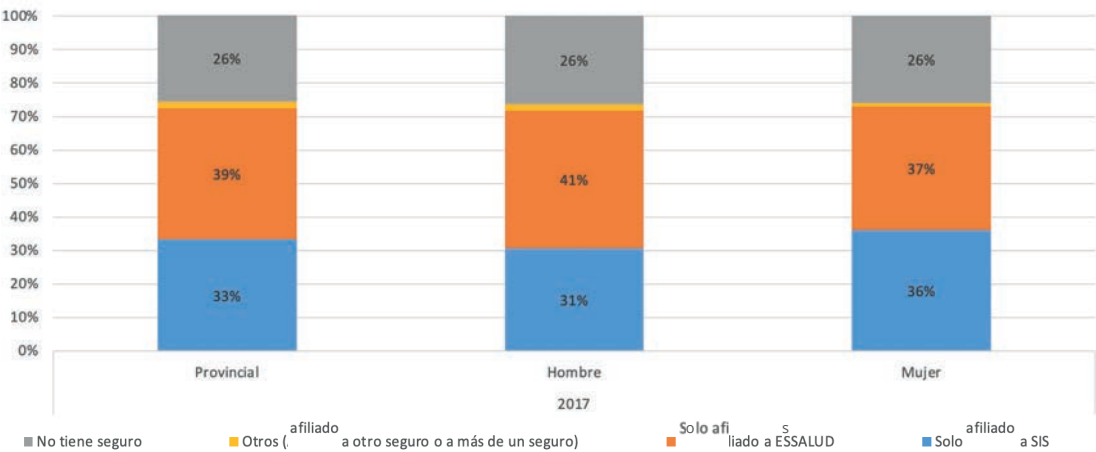
En la misma línea, el porcentaje de trabajadores que participó en procesos de negociación colectiva se incrementó muy levemente y solo llegó a ser del 5 % en 2018. Cabe notar que, a diferencia de 2014, en el último año registrado, las negociaciones colectivas incluyeron a un segmento mayor de trabajadores que el conjunto de sindicalizados; ello nos permite inferir que los espacios de negociación generados por los sindicatos fueron extendidos -en dicho año en particular- a un rango mayor que sus afiliados. Aun así, los niveles de participación y sindicalización siguen siendo mínimos, lo que reafirma el gran margen de poder y dominación que ostentan las empresas agroindustriales en las relaciones laborales con sus trabajadores (véase Gamero, 2012).

Acceso a la salud

Otro derecho que se ve potencialmente afectado por la reducida estabilidad del trabajo agroindustrial es el acceso a la salud. Según las planillas electrónicas del MTPE, la totalidad de trabajadores agroindustriales formales se halla afiliada al Sseguro de Salud Agrario (SSA) gestionado por el Seguro Social de Salud (EsSalud), modalidad que permite la afiliación de los parientes del trabajador como derechohabientes. Aunque formalmente esto garantizaría una cobertura mayoritaria de los hogares de la provincia, la evidencia muestra que su alcance es menos significativo.

Las razones de ello, son, primero, las condiciones que establece dicho seguro para acceder a sus prestaciones: el trabajador debe haber aportado, al menos, 3 meses consecutivos o 4 meses de manera intermitente, 12 meses antes de la contingencia que requiere ser atendida. En un contexto en el que la estacionalidad de la demanda de fuerza de trabajo se ha incrementado, estas condiciones pueden ser restrictivas, especialmente para las mujeres y los migrantes por temporada. En esta línea, Velazco et al. (2015) evidencian que, en comparación con el seguro regular, la cantidad de desafiliados al SSA a nivel nacional se ha incrementado año a año debido a la alta rotación del personal agroindustrial.

Gráfico 13. Afiliación a seguro de salud según tipo y género en la provincia de Virú, año 2017



Fuente: INEI (2017). Elaboración propia.

Hallamos también una baja afiliación de familiares de trabajadores al SSA. Según los datos de EsSalud, en 2012, por cada trabajador dependiente asegurado en la región La Libertad, había 1.1 derechohabientes afiliados. Si extrapolamos este cálculo a Virú, en 2017, los inscritos en el SSA deberían superar las 56,000 personas, que representarían más del 60 % del total poblacional de la provincia.

El censo, no obstante, evidencia cifras bastante más acotadas sobre el alcance del SSA: aunque en 2017 EsSalud era el seguro de mayor cobertura en Virú, afiliaba a solo el 39 % de la población o, en términos proporcionales, a 0.3 derechohabientes por trabajador agroindustrial.

Un factor que explicaría la menor afiliación al SSA en Virú es la gran expansión de la cobertura del Seguro Integral de Salud (SIS), que llegó a asegurar a más de un tercio de la población provincial en 2017. A diferencia del SSA, para acceder a las prestaciones del SIS, no se requiere de aportes y cuenta, además, con una red pública de hospitales y centros de salud de mayor alcance en la provincia y en el territorio nacional. En Virú, EsSalud dispone solo de dos establecimientos -un hospital de categoría menor y un centro de salud- en comparación con los 18 establecimientos en los que se pueden atender gratuitamente los afiliados al SIS. Además de la gran precariedad que caracteriza a los servicios de salud prestados por el Estado -Minsa y EsSalud-, este último se vería aún más comprometido por su bajísima capacidad de atención. Velazco et al. (2015) evidencian que, a nivel nacional, solo el 29 % de asegurados al SSA acudió a EsSalud para atenderse; el resto prefirió utilizar otro servicio o no acudir a ninguno.

Tabla 10. Tipo de establecimiento de salud según sector proveedor del servicio

	PRIVADO	PÚBLICO	
		MINSA (SIS)	ESSALUD
Establecimientos de salud	9	18	2
Hospital o clínicas de atención	-	1	1
Centro médico con cama	-	1	-
Centro de salud	2	3	1
Puestos o postas de salud	-	12	-
Otros	7	1	-

Fuente: RENIPRESS (2015). Elaboración propia.

Finalmente, cabe resaltar que el SSA genera un déficit anual de millones de soles, que ha tenido que ser asumido y financiado por el fondo del seguro regular de EsSalud. Según Velazco et al. (2015), una de las causas principales de este déficit son los reducidos aportes de las empresas agroindustriales. Estas entidades solo derivan el 4 % de los salarios de sus trabajadores al seguro, gracias al beneficio otorgado por la Ley 27360 de promoción del sector agrario.

De manera general, entonces, podemos afirmar que, en Virú, el Estado ha terminado subsidiando, en gran medida, el acceso a la salud de los trabajadores agroindustriales y de sus familias. Ello se ha producido mediante la prestación de servicios de salud vía SIS u otro medio a quienes no pueden afiliarse al SSA o exceden su capacidad de atención; también lo ha hecho asumiendo con fondos públicos el déficit originado por las empresas empleadoras.

Acceso a una pensión digna

Existen pocos registros y análisis sobre el sistema pensionario al que están sujetos los trabajadores agrícolas. Sin embargo, se sabe que una de las características distintivas entre los asalariados agroindustriales, y los trabajadores y productores agrícolas independientes es que los primeros están afiliados a un sistema de pensiones por ley. En el caso de Virú, en 2018, casi todos los asalariados agrícolas estaban afiliados al sistema privado de pensiones (conocido como AFP, siglas de administradora de fondos de pensiones), y solo el 13 % pertenecía al sistema nacional (conocido como ONP, siglas de Oficina de Normalización Previsional). Esta preferencia por las AFP tendría relación con la cantidad de años de aporte exigida por la ONP -20 - para el cobro de una pensión, condición que no se adapta a la realidad altamente inestable del empleo agroindustrial.

Si bien las AFP permiten el cobro de los fondos pensionarios a los 65 años de edad sin ningún otro requisito, este sistema adolece de significativos problemas estructurales: altas comisiones cobradas a los aportantes (S/ 28 por cada S/ 100 aportados) y pérdida de fondos en los últimos años, debida a malas inversiones. En este contexto, la situación de los trabajadores agroindustriales en las AFP es preocupante: el estancamiento de su ya bajo salario y la cada vez más alta estacionalidad de su empleo afectan directamente su capacidad de aportación. Nuevamente, podemos prever que los migrantes estacionales y las mujeres son quienes menos pueden aportar a sus fondos de pensiones; en el caso de estas últimas, existen dos motivos: reciben salarios más bajos y son más susceptibles a la rotación.

Tabla 11. Tipo de sistema de pensiones de trabajadores agroindustriales

	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
ONP	13 %	11 %	12 %
AFP	87 %	88 %	87 %
Sin régimen pensionario	1 %	1 %	1 %
Total	100 %	100 %	100 %

Fuente: MTPE (2018). Elaboración propia.

Ahora bien, cabe hacer algunas preguntas relevantes: ¿existe alguna posibilidad de que un trabajador agroindustrial pueda aportar un número significativo de años para disponer de una pensión mínimamente digna?, ¿podría esta contribución de largo plazo compensar la estacionalidad de su trabajo anual? La caracterización etaria del conjunto de trabajadores agroindustriales esboza respuestas negativas para las preguntas anteriores. Como establecimos, casi la totalidad de los obreros se halla entre los segmentos de jóvenes y adultos jóvenes (de 18 a 44 años), mientras que la contratación de trabajadores adultos consolidados o mayores (de 45 a 75 años) es minoritaria. Esto implica la pérdida de alrededor de 20 años de posibles aportes (personas entre los 45 y los 65 años) a su fondo pensionario.

En suma, es muy poco probable que, dadas las características del empleo agroindustrial, los trabajadores de estas empresas tengan acceso a una pensión que les permita vivir una vida digna durante su vejez.

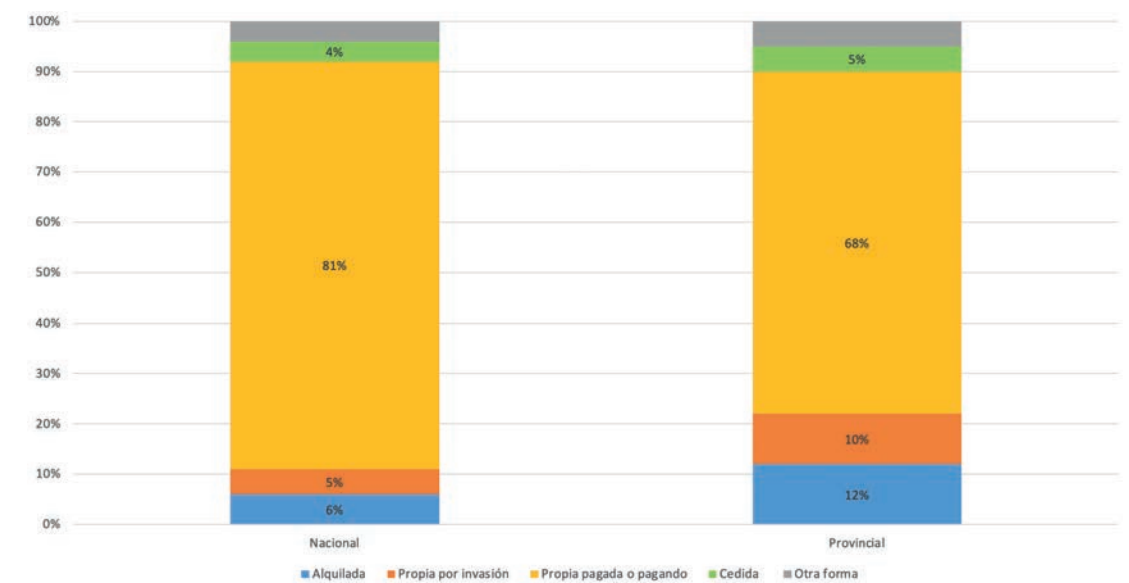
EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES MATERIALES DE VIDA DE LOS TRABAJADORES

Vivienda

La población agropecuaria Virú reside casi por completo en viviendas independientes; solo una muy minoritaria proporción reside en viviendas de mayor precariedad, como chozas, cabañas, o viviendas colectivas o improvisadas.⁷ Esta característica establece una moderada diferencia con la población agropecuaria nacional que, debido a su mayoritario carácter rural, mantiene un porcentaje reducido, pero significativo, de personas que residen en chozas o cabañas (10 % en 2007 y 4 % en 2017).

Por otro lado, el régimen de tenencia bajo el que se hallan las casas independientes de la población agropecuaria de Virú también se diferenció moderadamente del de la PEA agropecuaria nacional. En 2007 y 2017, el porcentaje de viviendas propias fue levemente mayor a nivel nacional (86 %) que en la provincia (78 % en 2007 y 84 % en 2017). Dicha diferencia se puede explicar, en ambos años, por la proporción superior de viviendas alquiladas en Virú, lo que nos remite a la presencia de mayor migración estacional. Dentro del segmento de casas propias, es interesante notar que, en 2007, el porcentaje de viviendas obtenidas por invasión en el ámbito provincial (10 %) dobló al porcentaje nacional (5 %). Este segundo dato indica la relevancia de los migrantes recientes, del último quinquenio, quienes utilizan la invasión para construir nuevos asentamientos urbanos.

Gráfico 14. Régimen de tenencia de las viviendas de la población agropecuaria a nivel nacional y provincial, 2007



Fuente: INEI (2007). Elaboración propia.

⁷ Dado que no registró migración, es posible que el censo no haya identificado a cabalidad la importancia de las viviendas colectivas y la existencia de hacinamiento.

Gráfico 15. Régimen de tenencia de las viviendas de la población agropecuaria a nivel nacional y provincial, 2017



Fuente: INEI (2017). Elaboración propia.

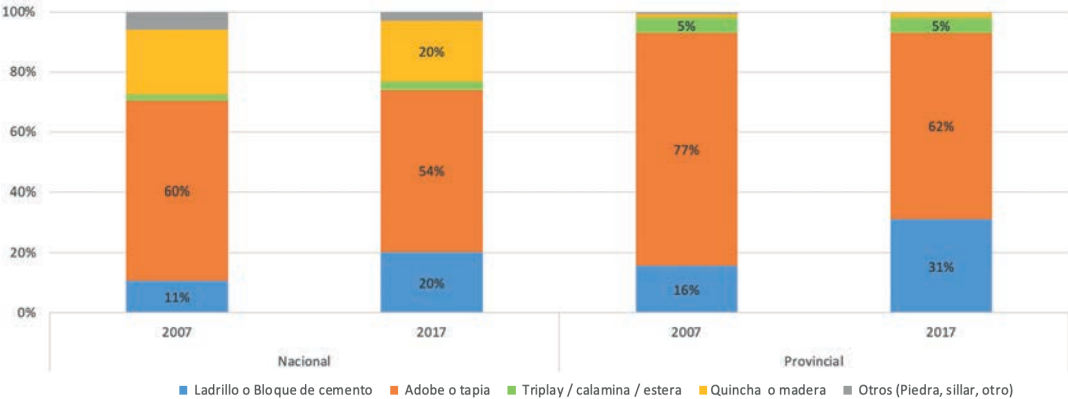
Lamentablemente, el censo de 2017 discontinuó la medición de la tenencia por vía de adjudicación⁸ y registró, más bien, el régimen de propiedad. Para dicho año, las casas propias no tituladas fueron la mayoría de las viviendas independientes (52 %), mientras que aquellas con título representaron un poco más de un tercio. Esta proporción difirió moderadamente con el patrón nacional, en el que se verifica un mayor porcentaje de viviendas no tituladas a causa, principalmente, de su ubicación en el ámbito rural. Aun así, la vasta proporción de predios sin titular de la PEA agropecuaria viruñera es mayoritaria, y abona a la inferencia anterior sobre la periurbanidad o marginalidad de los asentamientos de dicha población.

Respecto del material de construcción de las viviendas en Virú, observamos, primero, que predominan el adobe o tapia -el mayoritario-, y el ladrillo o cemento. Otros materiales tradicionalmente usados en espacios rurales, como la quincha o la madera, tienen una representación muy reducida. En segundo lugar, se evidencia una tendencia compartida tanto a nivel nacional como provincial: entre 2007 y 2017, las viviendas con paredes de ladrillo o cemento estuvieron cerca de duplicar su proporción, mientras que aquellas constituidas por paredes de adobe o tapia se redujeron. En Virú, no obstante, este decrecimiento fue moderadamente mayor: las viviendas con paredes de adobe o tapia pasaron del 77 % al 62 % al finalizar el período analizado. Un patrón particular de la provincia fue la minoritaria, pero sostenida, proporción -5 %- de viviendas con paredes de materiales muy precarios, como triplay, calamina y esteras, típicamente usados para invasiones urbanas.

Así, aunque se evidencia una mejora en la calidad de los materiales empleados para la construcción de las viviendas (más ladrillo y cemento) -moderadamente mayor al patrón nacional-, el adobe se mantiene como el material utilizado más frecuentemente por los hogares de trabajadores agroindustriales viruñeros. Muy probablemente, este es el material utilizado para la construcción inicial de sus casas. Si consideramos que la vasta mayoría de trabajadores agroindustriales es migrante estable y de relativa antigüedad -el 60 % de la PEA agropecuaria de la provincia es inmigrante antiguo-, podemos inferir que existen ciertas barreras económicas relativas a las retribuciones salariales que dificultan la evolución de la infraestructura de las viviendas.

8 La caracterización del régimen de tenencia de las casas propias es diferente en los censos de 2007 y 2017: mientras el primero indaga acerca del origen de la adquisición de una vivienda, el segundo sondea acerca de la condición de titulación o no titulación del predio.

Gráfico 16. Material de las paredes de las viviendas de la población agropecuaria a nivel nacional y provincial, 2007 y 2017



Fuente: INEI (2007-2017). Elaboración propia.

Servicios básicos

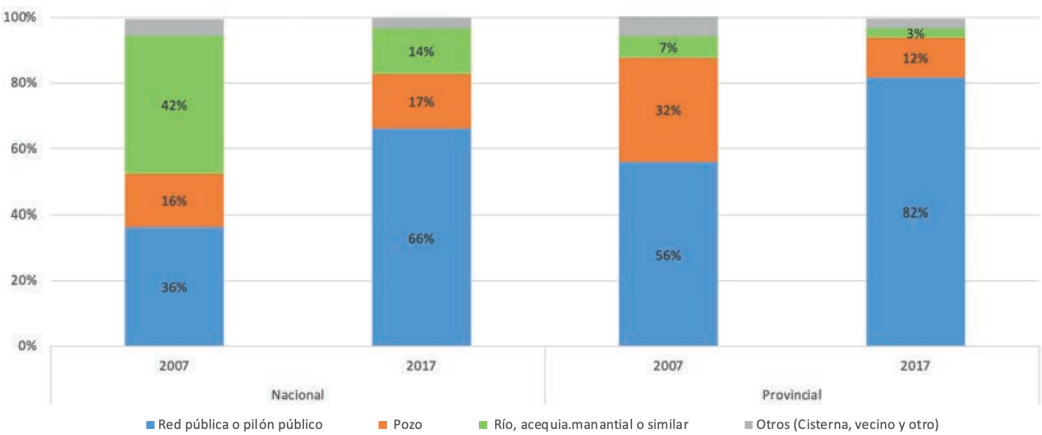
Entre 2007 y 2017, la provisión de servicios básicos, como agua, desagüe y alumbrado eléctrico por parte del Estado mejoró de manera generalizada en todo el territorio peruano. Para la población agropecuaria nacional, esta mejora se dio a través de la ampliación de la cobertura de servicios en las zonas que carecían de estos, principalmente en áreas rurales. En Virú, en cambio, que goza de una mayor presencia del Estado gracias a su carácter predominantemente urbano, observamos una optimización en las modalidades de servicios previamente utilizados.

Así, por ejemplo, se puede verificar que el abastecimiento de agua potable para la población agropecuaria mejoró superlativamente entre 2007 y 2017. En efecto, las viviendas que accedían a agua vía una red pública, dentro o fuera de la vivienda, o vía un pilón de uso público pasaron de ser el 56 % al 82 % en la provincia. Aunque a nivel nacional se halló una tendencia evolutiva similar, esta se vincula con la reducción del acceso a agua mediante fuentes hídricas naturales, como ríos o acequias. En cambio, a nivel provincial, esta mejora se explicó, principalmente, por la drástica disminución de las viviendas que se abastecían mediante pozo; en 2017, pasaron a representar una minoría: el 12 %.

Siguiendo un patrón análogo, el acceso a soluciones sanitarias por parte de la población agropecuaria también mejoró en el período 2007-2017. En 2017, el 48 % de las viviendas ya tenía conexión al alcantarillado público en Virú, más del doble que una década atrás. Nuevamente, a diferencia del país en general, donde la cobertura pública se amplió para las casas que no tenían solución sanitaria, en Virú esta mejora se explicó por la disminución de viviendas que contaban con un pozo ciego o letrina, tipo de servicio mejor conocido como silo. Aun así, cabe resaltar que la proporción de viviendas que disponen de silos como servicios higiénicos sigue siendo muy elevada en la provincia: 47 %.

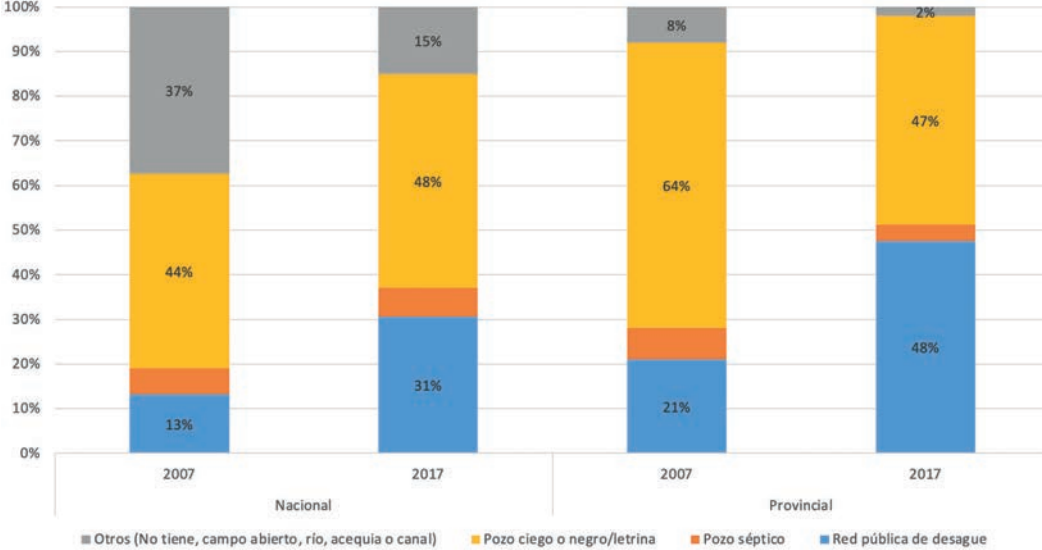
Finalmente, la proporción de viviendas que disponían de alumbrado eléctrico también creció de manera importante tanto a nivel nacional como provincial. Específicamente en Virú, casi todas las viviendas de la población agropecuaria -cerca del 90 %- contaban con energía eléctrica en 2017.

Gráfico 17. Tipo de abastecimiento de agua de las viviendas de la población agropecuaria en el país y en la provincia de Virú, 2007 y 2017



Fuente: INEI (2007-2017). Elaboración propia.

Gráfico 18. Tipo de solución sanitaria de las viviendas de la población agropecuaria en el país y en la provincia de Virú, 2007 y 2017



Fuente: INEI (2007-2017). Elaboración propia.

Tabla 12. Viviendas de población agropecuaria que dispone de alumbrado eléctrico, 2007 y 2017

	2007	2017
Nacional	42 %	75 %
Provincial	64 %	87 %

Fuente: INEI (2007-2017). Elaboración propia.

Cabe notar que la ampliación de la cobertura de servicios básicos no ha garantizado un abastecimiento total o de calidad. El nivel de acceso a agua potable es un indicador ilustrativo.

En este aspecto, se observa que, del total de casas con abastecimiento de agua vía red pública o pilón, aquellas que contaban con agua diariamente representaron más del 60 % tanto en 2007 como en 2017. En el país, en cambio, la proporción de viviendas de la población agropecuaria con acceso diario a agua superó el 80 % en ambos años. La brecha es todavía mayor si comparamos la proporción de viviendas con un abastecimiento de agua de alta calidad, es decir, acceso vía red pública, todos los días, las 24 horas del día. Mientras en el país el porcentaje con este nivel de abastecimiento se elevó hasta alcanzar el 61 % en 2017, en Virú fue minoritario y se redujo hasta el 12 % el mismo año.

Tabla 13. Calidad del abastecimiento de agua en viviendas de la población agropecuaria en el país y en la provincia de Virú, 2007 y 2017

	NACIONAL		PROVINCIAL	
Año	2007	2017	2007	2017
Red pública o pilón de uso público	36 %	66 %	56 %	82 %
Acceso a agua vía red pública o pilón todos los días	84 %	81 %	66 %	63 %
Acceso a agua vía red pública o pilón todos los días y 24 horas	56 %	61 %	15 %	12 %

Fuente: INEI (2007-2017). Elaboración propia.

Adicionalmente, podemos observar que, en comparación con el porcentaje nacional, la población agropecuaria de Virú tiene un mayor acceso al paquete de servicios básicos completos: agua y desagüe vía red pública, y alumbrado eléctrico. En efecto, el 45 % de las viviendas de las familias dedicadas a esta actividad dispone de dicho paquete, mientras que solo el 5 % no cuenta con ningún servicio básico de cobertura pública. No obstante, la mayoría de la población agropecuaria tanto nacional como provincial dispone de solo uno o dos de los tres servicios mencionados; en Virú, la cobertura del servicio de desagüe es la que aún se encuentra muy relegada. Tomando en consideración el alto porcentaje de viviendas que no disponen de agua potable las 24 horas del día o todos los días, la proporción de hogares con un paquete parcial de servicios básicos sería todavía mayor.

Tabla 14. Acceso combinado a servicios básicos en viviendas de población agropecuaria en el país y en la provincia de Virú, 2017

	NACIONAL		VIRÚ	
No tienen ninguno	366,933	16 %	1,177	5 %
Tiene 1 de 3 servicios	571,361	25 %	4,048	19 %
Tiene 2 de 3 servicios	723,934	31 %	6,737	31 %
Tiene 3 de 3 servicios	646,521	28 %	9,887	45 %
Total	2'308,749	100 %	21,849	100 %

Fuente: INEI (2017). Elaboración propia.

8

Oportunidades y Externalidades

Educación

El carácter urbano y generacionalmente joven de la población agropecuaria de Virú ha favorecido su acceso a la educación. En efecto, advertimos que la tasa de analfabetismo total y la brecha entre géneros de la PEA agropecuaria en dicha provincia es mucho menor que la tasa nacional: alrededor de la mitad. De manera similar, como se puede observar en la tabla 16, en 2017, la población agropecuaria sin ningún nivel educativo completado también fue menor a nivel provincial que a nivel nacional: alrededor del 5 % y del 9 %, respectivamente.

A pesar de este mayor acceso a formación por parte de la población de Virú, el nivel y evolución del logro educativo -último nivel alcanzado- de la PEA agropecuaria en Virú no difieren en mucho del patrón nacional. De manera general, en los dos ámbitos, se evidenció un moderado avance en el logro de la educación básica regular (EBR) en el período 2007-2017: como mencionamos, el porcentaje de personas que no culminó ningún nivel educativo se redujo -especialmente para las mujeres-, y la proporción de los que culminaron la secundaria se incrementó, y de los que culminaron solo la primaria disminuyó (véase la tabla 16). A pesar de esta leve mejora, en 2017, la mayor parte de la PEA agropecuaria de la provincia, el 45 %, solo había completado la primaria; de este modo, el promedio de años de estudio de la población de Virú fue de apenas 6.51 (PNUD, 2019).⁹ Finalmente, a pesar de la evidente reducción de las brechas de género en la educación, el porcentaje de mujeres que logró culminar la secundaria fue significativamente menor al de varones.

Tabla 15. Nivel de analfabetismo de la población agropecuaria en el país y en la provincia de Virú, 2007 y 2017

Año	NACIONAL		VIRÚ	
	2007	2017	2007	2017
Hombre	9 %	7 %	5 %	4 %
Mujer	27 %	20 %	15 %	10 %
Total	13 %	11 %	7 %	6 %

Fuente: INEI (2007 y 2017). Elaboración propia.



9 Según el índice de desarrollo humano elaborado por el PNUD, Virú ocupa el puesto 139 de 195 provincias en la cantidad promedio de años que estudia su población, y el puesto 109 de 195 en la cantidad de población mayor a 18 años que culminó la secundaria. Ambas cifras exponen la mayor problemática de la educación secundaria y superior en la provincia.

Tabla 16. Último nivel educativo alcanzado en años de población mayor o igual a 18 años en el país y en la provincia de Virú, 2007 y 2017

	NACIONAL		VIRÚ		VIRÚ 2007		VIRÚ 2017	
	2007	2017	2007	2017	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
Sin nivel	13 %	9 %	10 %	5 %	7 %	18 %	3 %	8 %
Inicial	0 %	0 %	0 %	1 %	0 %	0 %	1 %	1 %
Primaria	51 %	45 %	47 %	45 %	47 %	46 %	44 %	46 %
Secundaria	30 %	39 %	32 %	41 %	34 %	27 %	43 %	36 %
Superior no universitaria y universitaria	7 %	7 %	11 %	9 %	12 %	9 %	9 %	9 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Fuente: INEI (2007 y 2017). Elaboración propia.

De forma similar, el porcentaje de personas que accedió y/o culminó algún tipo de educación superior (ES) siguió siendo muy reducido en el período 2007-2017, y se redujo en la población agropecuaria provincial. Cabe resaltar que no se evidenció una brecha de género relevante en este nivel de educación, y tanto varones como mujeres que accedieron o terminaron algún tipo de ES representaron un segmento minoritario.

En síntesis, las condiciones que distinguen a la provincia de Virú de la población agropecuaria nacional -más rural y envejecida- no se han traducido en un desarrollo diferenciado de su logro educativo: el grueso solo ha cursado parcialmente la EBR y un porcentaje mínimo accede a algún tipo de ES. Al contrario de lo que se podría suponer, el conjunto de migrantes estacionales y recientes ostentan mejores indicadores de logro en relación con la EBR que quienes nacieron y/o residen permanentemente en Virú (INEI, 2017). Los factores que dificultan o ponen en riesgo la trayectoria escolar de la población agropecuaria en la provincia deben ser estudiados en profundidad, atendiendo con cuidado los impactos de la actividad agroindustrial en las dinámicas familiares y sociales de la localidad.

Las limitadas oportunidades de desarrollo técnico o profesional en Virú podrían ser un elemento explicativo de la problemática anterior. Aunque existe cierta oferta de ES en la provincia -7 institutos superiores-, casi todos son centros técnico-productivos (Cetpro) que ofrecen certificación de rango menor y cursos vinculados al mercado de servicios urbanos: cosmetología, confección textil o informática. Solo el Instituto Superior Tecnológico (IST) Virú ofrece carreras técnicas de mayor nivel, aunque todas relacionadas con la actividad agropecuaria.

Esta restringida oferta educativa estaría estrechamente asociada con una alicaída demanda: en conjunto, los institutos matricularon solo a 623 estudiantes en 2019 (Minedu, 2019), apenas el 3 % de la población entre 18 y 29 años de la provincia. En este contexto, las empresas agroindustriales contribuyen poco o muy poco a las oportunidades educativas de sus trabajadores y de sus hijos dependientes.

Ello se debe, primero, a que las bajas remuneraciones y la precariedad del empleo agroindustrial no permitirían a los trabajadores asumir el costo de estudiar o de tener a un hijo o hija joven estudiando.

Segundo, se explica por el hecho de que, a pesar de ser la principal fuente de trabajo en la provincia, los agronegocios generan una muy reducida demanda de empleo calificado y bien remunerado, lo que desincentivaría aún más a los jóvenes a considerar la educación superior como una vía de ascenso y superación.

Mercado de trabajo provincial

Las oportunidades que tienen los jóvenes para desarrollarse como profesionales en otros mercados de trabajo de la provincia también son limitadas. Es cierto que la presencia de las agroindustrias en Virú ha favorecido la ampliación del mercado de servicios, los cuales se orientan, primero, a complementar las operaciones diarias de las empresas, pero también a satisfacer las demandas alimenticias, educativas, de transporte y de recreación de los obreros y sus familias. Entre los primeros, están los negocios de transporte, comercio de insumos agropecuarios, indumentarias y otros servicios asociados; entre los segundos, se encuentran los mercados de abastecimiento, restaurantes, transporte público, bares, etcétera.

Tabla 17. Empresas y mercado laboral de Virú, 2017

PEA OCUPADA	37,256
Asalariados formales	29,437
Asalariados agroindustriales	28,401
Asalariados formales no agroindustriales*	1,036
Asalariados informales**	8,855
EMPRESAS PRIVADAS FORMALES	180
Empresas que emplean de 1 a 10 trabajadores	169

* Diferencia entre el número de asalariados formales y de asalariados agroindustriales.

** Diferencia entre la PEA ocupada y el número de asalariados formales.

Fuente: INEI (2017) y MTPE (2017). Elaboración propia.

El desarrollo de este mercado de trabajo en la provincia, no obstante, ha sido muy reducido en el ámbito de la formalidad. En efecto, los asalariados privados que no laboran directamente para las agroindustrias apenas representan el 5 % de los trabajadores formales de Virú: 1,036. En la misma línea, de las 180 empresas formales que operan en la provincia, 169 -94 %- son empresas pequeñas que emplean formalmente a 10 trabajadores o menos, por lo que el empleo generado por estas es restringido. En contraste, cerca de 9,000 personas laboran en el sector informal, entre quienes se ubican los jornaleros de la pequeña agricultura articulada a las empresas y aquellos que se cachuelean¹⁰ en los mercados y pequeños negocios en las capitales distritales. Como resultado, el ámbito informal se ha constituido como el segundo empleador de la provincia luego de los agronegocios.

Como se sabe, el trabajo informal comparte y profundiza varias características del empleo agroindustrial: alta precariedad laboral, salarios reducidos y cercanos a la RMV, ningún acceso a derechos laborales o protección social, y poca demanda de especialización.

Este mercado de empleo tampoco se configura como medio suficiente para el desarrollo de las personas y hogares de Virú.

Criminalidad

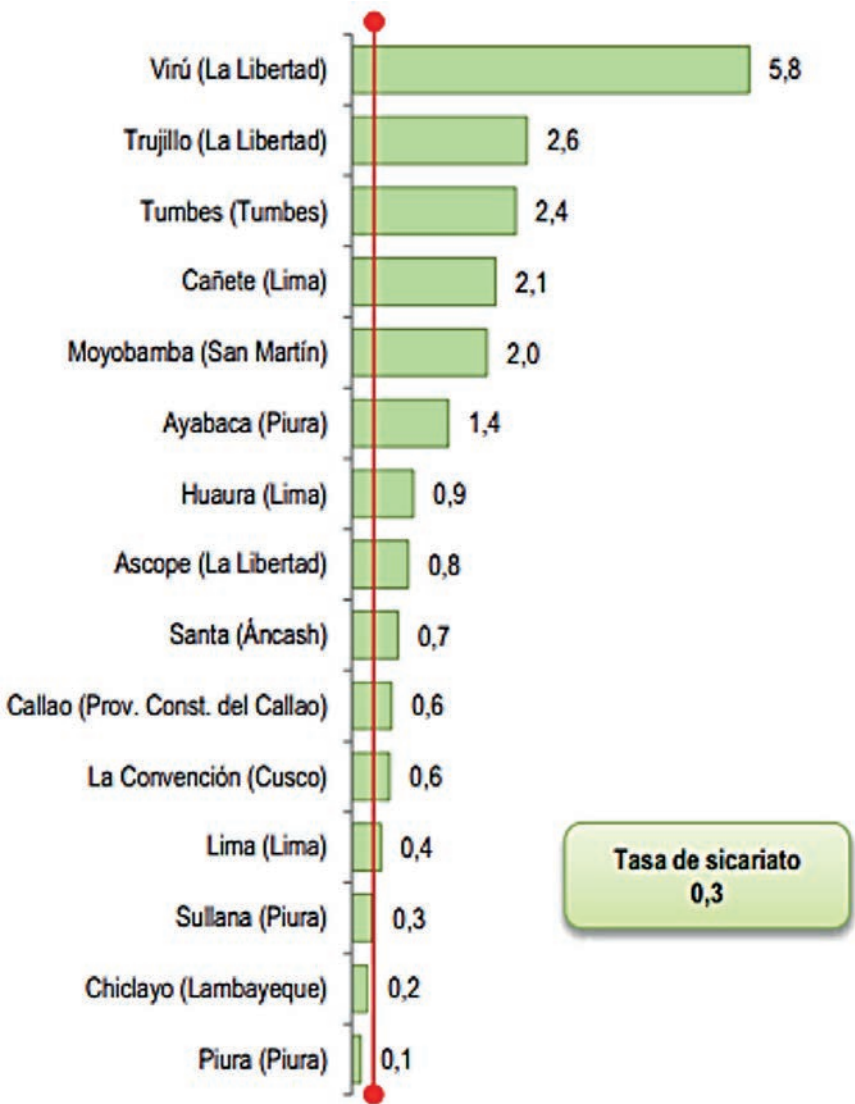
En el escenario descrito, Virú es una de las provincias más inseguras y violentas del país. Según los reportes noticiosos y policiales recabados de la última década, en Virú operan peligrosas organizaciones criminales que tienen como principal actividad delictiva la extorsión. Sus víctimas recurrentes son los pequeños y medianos negocios de la provincia, como farmacias, hoteles, casinos, restaurantes, entre otros. De manera especial, las empresas de transporte que movilizan a los trabajadores agroindustriales y proveen servicios a los agronegocios figuran entre las que están bajo amenaza regularmente.

El nivel de violencia que ejercen estas bandas criminales en la localidad ha sido brutal. En 2017, Virú fue la quinta provincia con mayor tasa de homicidios dolosos y de homicidios calificados en el país,¹¹ con 16 y 12 víctimas por cada 100,000 habitantes para cada tipo de homicidio, respectivamente. Así mismo, Virú fue la sexta provincia con la mayor tasa de robo agravado seguido de muerte en el país. Por último, para cerrar estas cifras de terror, en 2016, Virú superó a la capital nacional, Lima, y lideró la tasa de homicidios por sicariato en el país con 6 víctimas por esta modalidad de homicidio por cada 100,000 habitantes.

10 Este es un término peruano que se refiere a la acción de trabajar informalmente y por un período muy breve (un día, una semana) en una oportunidad laboral presentada.

11 Para que un homicidio sea considerado asesinato, debe ser realizado con alevosía y/o ensañamiento y/o por recompensa, de acuerdo con el artículo 108 del Código Penal (1991).

Gráfico 19. Tasa de calificación preliminar por sicariato por cada 100,000 habitantes según provincia, 2016



Fuente y elaboración: INEI (2017).

Aunque es necesario un estudio específico para profundizar en este fenómeno, que no quepa duda de que la actividad agroindustrial y la dinámica social generada por esta en su entorno territorial han sido determinantes en la criminalidad latente en Virú.

Entre los factores potencialmente asociados, están, por un lado, la conformación de nuevos y masivos asentamientos de trabajadores agroindustriales entre las décadas de 1990 y de 2000, caracterizados por su precariedad material y un desorganizado crecimiento poblacional. Por el otro, se puede señalar el desarrollo de dinámicas familiares condicionadas por la precariedad económica y reducidas redes de soporte a nivel local, especialmente en los hogares de migrantes y de mujeres solas.

Como resultado de estos y otros factores, podemos inferir que el nivel de cohesión social de los colectivos urbanos de la provincia es muy reducido; ello mermaría su capacidad para construir un orden social¹² -valores, normas de convivencia y una identidad moral- y para intervenir en dicho orden ante la irrupción de las organizaciones criminales.

12 Solo algunos asentamientos de trabajadores agroindustriales, como Valle de Dios, han logrado generar un fuerte orden social, gracias al dominio moral de las iglesias cristianas evangélicas. Valle de Dios, no obstante, amurallado para su protección y como signo de distinción, es una excepción frente a la criminalidad que pulula en el grueso de los núcleos urbanos de la provincia.

9 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES

Durante la primera mitad de la década de 1970, la Reforma Agraria dictaminada por el Gobierno de Juan Velasco expropió la propiedad de las haciendas y entregó la tierra a sus trabajadores, organizados desde ese momento en empresas agrarias. Con esta medida, se desarrolló una radical transformación de la estructura social que hasta entonces imperaba en el campo: cayó derrocada la oligarquía latifundista y se posicionó al campesinado como sujeto político del desarrollo agrario en el Perú. Poco más de veinte años después, a inicios de los años de 1990, el Gobierno de Alberto Fujimori introdujo cambios normativos significativos¹³ que revirtieron definitivamente el proyecto reformista y sentaron las bases de la neoliberalización del sector agrario. Gracias a la flexibilización de las reglas y el activo fomento del Estado de la inversión privada, se llevó adelante un nuevo proceso de concentración de la tierra de propiedad fiscal en manos de grandes corporaciones agroindustriales abocadas a la exportación (Eguren, 2004 y 2019).¹⁴ De esta manera, se concretó el ascenso de una nueva élite de poder económico en el campo y del gran agronegocio como vía principal del desarrollo agrario. En contraparte, el campesinado quedó definitivamente relegado por el Estado y asociado, discursivamente, a la pobreza y al subdesarrollo.

Sin embargo, ¿hasta qué punto se justifica la asignación preferencial de tierras y recursos a los grandes agronegocios por parte del Estado? Desde la narrativa del gremio agroindustrial, estas empresas contribuyen al país desde tres frentes principales:

- 1 la generación de divisas por exportaciones;
- 2 la innovación técnica y tecnológica para la producción agraria; y
- 3 el desarrollo de los territorios que articulan a través de la generación masiva de empleo.

El análisis del caso de la provincia de Virú, donde se asientan y operan las principales agroindustrias del país, tuvo como propósito central verificar qué tipo y qué nivel de desarrollo genera esta actividad.

13 Si bien Gobiernos anteriores tomaron varias medidas de corte contrarreformista, el Gobierno fujimorista estableció las condiciones normativas para el giro neoliberal de la economía peruana y específicamente de la actividad agraria. Entre las medidas normativas más importantes, están la nueva Constitución de 1993, la Ley 26505, conocida como Ley de Tierras, y la Ley 27360, ley de promoción del sector agrario.

14 Gobiernos posteriores, a pesar de sus aparentes diferencias ideológicas, sostuvieron e, incluso, profundizaron estas medidas como políticas de Estado (Eguren, 2019).

La evidencia que expone el estudio demuestra que, si bien esta provincia experimentó un crecimiento económico y demográfico muy significativo a partir de la llegada de los agronegocios, este se fundamenta en la precarización del empleo y en un desarrollo sumamente limitado.
Denominamos a este modelo crecimiento sin desarrollo.

A continuación, elaboramos sus características.

1 ES UN CRECIMIENTO DE BASES PRECARIAS QUE ATRAE SOLO A LOS MÁS POBRES (CAVERO, 2014) Y REPRODUCE SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

Virú se ha constituido como un foco de atracción de migrantes provenientes de áreas rurales ubicadas en la sierra circundante a la provincia y que sufren limitaciones económicas y sociales mayores. Entre las principales, se encuentran la escasez de tierras, la profunda crisis de la actividad agropecuaria, y los alarmantes niveles de pobreza monetaria y de desarrollo humano. En este contexto, la oferta laboral agroindustrial aparece como una de las pocas opciones para obtener mayores ingresos y, a mediano plazo, para acceder a mejores oportunidades y condiciones de vida en un contexto urbano. Las severas restricciones que afectan a estos territorios y las expectativas generadas por el trabajo agroindustrial explican que la inmigración a Virú haya sido mayoritariamente estable antes que estacional, y predominantemente de jóvenes y adultos jóvenes. Como resultado, la provincia ha experimentado un acelerado y desorganizado crecimiento demográfico y urbano en las últimas dos décadas.

En la práctica, no obstante, las posibilidades de desarrollo en Virú también son limitadas para quienes optan por abocarse al trabajo agroindustrial. Por un lado, estas personas carecen de acceso a la tierra, sea la habilitada por Chavimochic en terrenos fiscales, sea la disponible en espacios productivos tradicionales. Esto se debe al carácter excluyente de los mercados de tierras intervenidos directamente por el Estado o afectados por el efecto inflacionario de la agricultura por contrato, lo que reafirma su condición de "sin tierra" y su dependencia exclusiva de las empresas para subsistir.

Por el otro lado, el empleo agroindustrial se caracteriza por ser extremadamente precario. En el marco de lo permitido por la Ley 27360, de promoción del sector agrario, se observó que la demanda de trabajo asalariado es altamente estacional y las contrataciones son predominantemente temporales. El cambio de patrón productivo y el incremento de las exportaciones han profundizado aún más esta problemática: aunque el número de asalariados creció sostenidamente, se registró también una mayor rotación del personal y el empleo de regímenes de contratación que evitan la estabilización de trabajadores antiguos. A la par, se demostró que, a pesar del incremento de la rentabilidad de los agronegocios, el salario de los trabajadores se halla estancado y su retribución real acumulada al año equivale a recibir menos de una RMV cada mes.

Por último, como se vio posteriormente, la posibilidad de los trabajadores de acceder al sistema de protección social y de ejercer sus derechos laborales es muy restringida, por lo que existe baja sindicalización. La creciente inestabilidad laboral, el estancamiento de salarios bajos, los derechos laborales limitados y la desprotección de los trabajadores emulan perfectamente las condiciones del empleo informal.

Cabe resaltar que, en todos los casos, las trabajadoras agroindustriales son las más precarizadas: su empleo es todavía más estacional y peor pagado que el de sus pares hombres. Ello perjudica significativamente sus ingresos mensuales y acumulados al año, su participación en sindicatos y su acceso a esquemas de protección social, como el SSA y las AFP. Estimamos que los migrantes estacionales, quienes laboran en condiciones relativamente similares a las mujeres, afrontan situaciones parecidas.

Como resultado, los hogares de trabajadores agroindustriales son económicamente vulnerables (Cozzubo y Herrera, 2015), pues generan ingresos que los ubican apenas por encima de la línea de pobreza (Cavero, 2014) y bajo la constante amenaza del despido y rotación laboral. Por dichas razones, el empleo agroindustrial no es considerado una opción idónea para quienes participan en otro tipo de actividades en la provincia. Por ejemplo, Araujo (2018) recogió que los locales viruñeros prefieren dedicarse a trabajar sus propias tierras o emplearse como jornaleros independientes antes que laborar para las empresas. Por su parte, Cavero (2014) registró casos de migrantes que pretendían asentarse en Virú permanentemente, pero prefirieron retornar a sus lugares de origen al conocer la situación de los trabajadores de las empresas. Se trata de una ocupación y un modo de vida al que solo los más pobres y carentes de oportunidades están dispuestos a someterse.

2 ESTE CRECIMIENTO DESBORDA LOS SERVICIOS Y ESQUEMAS DE PROTECCIÓN DEL ESTADO A NIVEL SUBNACIONAL.

Debido a su paupérrima institucionalidad y presupuesto, la capacidad de los gobiernos y proveedores de servicios públicos a nivel subnacional ha sido ampliamente desbordada por el crecimiento demográfico acontecido en Virú y por la constitución improvisada de extensos asentamientos urbanos que albergan a la población migrante. El estudio evidencia que, pese a una evolución positiva de los indicadores, la condición legal de los bienes materiales de los hogares de trabajadores agroindustriales sigue siendo precaria: hacia 2017, la mayor parte de las viviendas de la población agropecuaria en Virú carecía de un título de propiedad, no tenía acceso a una red pública de desagüe y no disponía de los tres servicios básicos juntos -agua, desagüe y energía eléctrica-. De hecho, ese mismo año, solo el 12 % de las viviendas con acceso a una red pública de abastecimiento disponía de agua potable todos los días las 24 horas del día. Este porcentaje se ubica muy por debajo del registrado para la población agropecuaria nacional, incluyendo áreas rurales.

En la misma línea, el estudio demostró que el acceso a la protección social -derecho garantizado por el Estado- se encuentra doblemente limitado para los trabajadores agroindustriales.

Primero, la precariedad laboral a la que están sometidos afecta su afiliación o contribución al sistema de salud y pensiones. De este modo, se observó que, debido a la rotación laboral, el SSA es el único que presenta una tasa de desafiliación al alza. Igualmente, la inestabilidad, el estancamiento de los salarios y la marginación de grupos etarios adultos del trabajo agroindustrial restringen la capacidad de los obreros agroindustriales de generar y acumular aportes significativos en sus fondos pensionarios.

Un segundo motivo está relacionado con la insuficiente capacidad de los servicios de protección del Estado para atender las demandas de la población empleada por las agroindustrias. Por ejemplo, se observó que, a pesar de la masiva afiliación de trabajadores agroindustriales al SSA, existen solo dos centros de salud para los cerca de 30,000 obreros y sus miles de derechohabientes. La precariedad del servicio se debe, en gran medida, a que el aporte de los agronegocios al seguro es bastante menor que el de empresas sujetas al régimen laboral regular. Como resultado, los costos de protección social (salud y pensiones) son subsidiados directamente por las familias trabajadoras a través de sus ingresos personales y por el Estado, que, mediante fondos públicos, subsidia el gran déficit del SSA.

Cabe resaltar que la precaria presencia del Estado en la provincia ha sido, en múltiples situaciones, aprovechada por las agroindustrias para asumir el rol estatal con la población.¹⁵ Este tipo de acciones refuerza su legitimidad en la provincia, así como su influencia sobre los gobiernos locales.

3 LAS FAMILIAS TIENEN Poca CAPACIDAD PARA DESARROLLARSE Y ESTÁN EXPUESTAS A RIESGOS SOCIALES SIGNIFICATIVOS.

A pesar de sus activos característicos -como su composición etariamente joven y su residencia urbana-, los hogares de trabajadores agroindustriales no han logrado consolidar un nivel de desarrollo óptimo. En lo material, se evidenció que el adobe sigue siendo el material de construcción mayoritariamente usado para la construcción de sus casas. Si consideramos que el grueso de dicha población es inmigrante antiguo, podemos inferir que existen barreras económicas que dificultan la mejora de infraestructura en el largo plazo. Siguiendo un patrón similar, se observó que, aunque la población agropecuaria en Virú tiene mayor acceso a servicios educativos que la población agropecuaria nacional, esto no se ha traducido en un mayor logro: la mayoría solo completa parcialmente su EBR (menos de 7 años de estudio en promedio) y apenas una minoría cursa algún tipo de ES.

15 Durante la actual crisis del COVID-19, la Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos de Chavimochic (APTCH) ha acordado financiar la ampliación del Hospital Víctor García de Soles, en Chao, ante la ola de fallecimientos por el virus. Al respecto, véase: <https://noticiasviru.com/ampliaran-hospital-de-viru-para-atender-pacientes-covid/>

Una primera razón de este limitado progreso son las retribuciones económicas. Debido a los reducidos e inestables ingresos que obtienen los trabajadores agroindustriales, podemos inferir que concentran la mayor parte de sus gastos en asegurar su subsistencia y disponen de menos dinero para invertir en mejorar sus condiciones materiales y capacidades. En relación con lo anterior, un segundo factor de relevancia es el restringido mercado laboral en la provincia: este se reduce al empleo agroindustrial o al empleo informal; ambos se caracterizan por su alta precariedad, bajos salarios y poca especialización. Tercero, dada la reducida demanda de profesionales en el mercado laboral y -asociada a esta- la limitada oferta educativa de la provincia, la educación superior no constituye una vía de desarrollo real para la juventud que aspira a residir en Virú. Esto explicaría, en gran parte, el paupérrimo logro educativo hallado. Finalmente, un factor que debe ser explorado en profundidad a través de estudios etnográficos posteriores es el impacto de la actividad agroindustrial en la dinámica de los hogares de trabajadores, así como en las sociedades que estos han constituido.

Sin entrar en detalles, los datos estadísticos nos han permitido acercarnos a estas comunidades a través del análisis de la criminalidad. En efecto, el estudio recogió que Virú se constituye como una de las provincias más violentas e inseguras del país, debido a la amplia presencia de bandas criminales. Además de la precariedad económica y las limitadas oportunidades de desarrollo, consideramos que el desorganizado crecimiento de la población urbana ha sido determinante. En efecto, la constitución improvisada de asentamientos cada vez más extensos ha dificultado la cohesión de la población migrante en torno a normas sociales e identidades compartidas; finamente, esto ha mellado la capacidad de las sociedades para intervenir sobre el colectivo. En suma, se generan las condiciones para el desarrollo del crimen a niveles organizados y el escalamiento de la violencia ejercida. Nuevamente en este punto, son los hogares, las sociedades locales y el Estado los que asumen la externalidad generada por la actividad agroindustrial en costos materiales, sociales y humanos.

Como lo resumen Guereña y Wegerif (2019), la concentración de la tierra es, difícilmente, funcional a un desarrollo agrario amplio, democrático y sostenible. Esto se explica, primero, porque esta lleva necesariamente a la concentración de la riqueza generada sobre la base de la producción de la tierra en un conjunto pequeño de propietarios; segundo, porque estos actores obtienen un poder excesivo sobre la esfera pública. Con la aspiración de transformar este en un modelo de desarrollo eficaz, se requeriría, por lo menos, una institucionalidad pública sólida que sea capaz de

- 1 regular la organización productiva para redistribuir amplia y suficientemente los ingresos generados por esta actividad entre la clase trabajadora; y
- 2 limitar a través de normas y del fortalecimiento de la sociedad civil el poder que ostentan los grandes propietarios.

En el caso peruano, no obstante, ha acontecido un proceso absolutamente contrario. El Estado ha establecido las condiciones normativas e institucionales para favorecer la acumulación de la renta y el poder de las corporaciones agroindustriales. Para ello, ha dotado a las agroindustrias de factores productivos a bajo costo y con mínimas regulaciones, como tierra, riego y fuerza de trabajo. Así mismo, ha avalado su dominio total sobre las relaciones laborales a partir de un régimen que formaliza la extrema precariedad laboral y debilita el derecho a la sindicalización. El desarrollo y bienestar de las sociedades locales, en cambio, han sido subordinados al proyecto del agro corporativo. Afectados por la precarización, los gobiernos y servicios públicos de nivel subnacional, así como los hogares de trabajadores, son recargados con las demandas y externalidades del crecimiento generado por la actividad agroindustrial en la provincia. Como resultado, luego de 20 años del boom agroindustrial en Virú, hallamos una sociedad económicamente vulnerable, con una capacidad limitada para desarrollarse y altamente fracturada por la violencia del crimen organizado.

Los resultados del análisis presentado contrastan radicalmente con aquellas interpretaciones que atribuyen el pobre nivel de desarrollo del país a una institucionalidad pública incapaz de traducir el crecimiento económico en desarrollo, aquellas que diagnostican un *“Estado hábil para administrar la macroeconomía del país y defectuoso para gobernarlo”* (Vergara, 2020). A contracorriente, el caso de Virú evidencia que las mismas medidas que permiten un crecimiento y enriquecimiento de tal nivel precarizan la economía de los hogares, petardean la ya deteriorada institucionalidad pública presente a nivel subnacional y están conectadas con la endeble cohesión de las sociedades.

A pesar de las evidencias, la influencia de la élite corporativa en los poderes del Estado ha permitido afianzar la continuidad de este modelo. En efecto, a fines de 2019, el Congreso de la República, de mayoría fujimorista¹⁶ aprobó una nueva extensión de la Ley 27360 hasta 2031. A la par, la construcción de la fase III del Proyecto Chavimochic en La Libertad entró en un nuevo proceso de licitación; de concretarse, acontecería una nueva ola de concentración de la tierra de aún mayores dimensiones en el valle de Chicama. Sorprendentemente, en el marco de la crisis sanitaria, las grandes agroindustrias fueron beneficiadas con créditos millonarios que contaron con respaldo estatal y tasas de interés menores al 2 %.¹⁷ Como resultado, aunque durante los primeros meses de la pandemia dicho sector sufrió reveses importantes, su recuperación ha sido veloz: ya para mayo, la agroindustria fue la única dentro del rubro agroexportador que no se contrajo y replicó los valores de exportación obtenidos el año anterior (Gestión, 2020).

16 Cabe resaltar que el secretario general del partido fujimorista fue el ministro de agricultura que impulsó la promulgación de la ley 27360, y es actual gerente de una de las empresas agroindustriales más grandes del país.

17 El Fondo Reactiva Perú fue concebido, originalmente, como un crédito dirigido específicamente a micro, pequeñas y medianas empresas por su alto nivel de vulnerabilidad ante la crisis y su mayoritaria participación en la generación de empleo para la PEA urbana. Las características de este fondo son el respaldo estatal superior al 80 % y una tasa crediticia menor al 2 %. La implementación de su fase I, no obstante, ha sido ampliamente criticada, ya que el 35 % del dinero distribuido ha sido asignado a grupos corporativos de alta facturación, entre ellos, las grandes agroindustrias costeñas. Véase Salazar (2020).

En la otra cara de la moneda, la población de trabajadores agroindustriales ha experimentado la crisis a partir del abandono del Gobierno nacional, y la precariedad de sus municipios y servicios de salud. Como lo resalta Araujo (2020), los asalariados agroindustriales están al margen de las medidas de protección social otorgadas por el Estado, dado que no cumplen con una serie de características para ser focalizados: no son estadísticamente pobres y han sido registrados en planilla como asalariados dependientes. En este escenario, aquellos que no pudieron retornar a sus lugares de origen, se han visto obligados a seguir laborando para las empresas bajo condiciones de protección sanitaria no idóneas ni reguladas efectivamente por el Estado (Araujo, 2020). En consecuencia, para inicios de julio, Virú registraba oficialmente cerca de 1,000 casos de COVID-19 y el único hospital con capacidad para la atención denunciaba tener solo 8 camas de internamiento (Correo, 2020). Al 9 de julio de 2020, es una de las provincias de La Libertad con mayor ratio de fallecidos por COVID-19 (Gobierno Regional de La Libertad, 2020).

El modelo agroindustrial corporativo y latifundista puesto en marcha en la costa ha fallado como vía de desarrollo. A pesar de ello, la cooptación de las élites corporativas sobre el Estado es más sólida que nunca, por lo que la pugna de los gremios campesinos peruanos por la implementación de políticas integrales a favor de la agricultura familiar continuará durante las próximas décadas. En el marco de esta lucha, además de políticas que mejoren la producción y comercialización de la producción agropecuaria, este estudio resalta la necesidad y relevancia de una nueva política de tierras en favor del campesinado que aborde la problemática distributiva, y establezca las condiciones para una gestión democrática y eficiente de este recurso. Limitar la concentración de la propiedad fiscal y frenar su fragmentación excesiva en el ámbito de las comunidades serán medidas clave para garantizar la disponibilidad de la tierra para las generaciones jóvenes y su derecho a vivir dignamente de ella.

REFERENCIAS

Andina. (2019). Perú puede generar 2 millones de nuevos empleos en la agroexportación. Andina. Agencia Peruana de Noticias. Disponible en: <https://andina.pe/agencia/noticia-peru-puede-generar-2-millones-nuevos-empleos-la-agroexportacion-776534.aspx>.

Araujo, A. L. (2020). Entre la precariedad laboral y la crisis sanitaria: la situación de los trabajadores agroindustriales'. Noticias SER. Disponible en: <http://www.noticiasser.pe/opinion/entre-la-precariadad-laboral-y-la-crisis-sanitaria-la-situacion-de-los-trabajadores>

Araujo, A. L. (2018). El lugar de la tierra en las dinámicas de diferenciación interna en la costa agroindustrial'. Sepia, Perú: el problema agrario en debate, 17, pp. 543-590.

Bourliaud, J. y Eresue, M. (2015). La reconcentración de las tierras costeñas. La Revista Agraria, 15 (169), pp. 3-5.

Cavero, M. (2014). Crecimiento agroindustrial e impacto económico local en Virú (La Libertad) y Cerro Colorado (Arequipa). Documento de trabajo, 153. Lima: IEP, RMISP.

Correo. (2020). La Libertad: Hospital de Virú solo cuenta con 8 camas. Correo. Disponible en: <https://diariocorreo.pe/edicion/la-libertad/la-libertad-hospital-de-viru-solo-cuenta-con-8-camas-944159/>

Cuadros, F. (2018). Resultados del régimen de promoción del sector agrario (Ley 27360) [diapositivas de Power Point]. Disponible en: <http://trabajodigno.pe/wp-content/uploads/2016/02/Resultados-del-r%C3%A9gimen-de-promoci%C3%B3n-del-sector-agrario.ppt>

De los Ríos, C. y Remy, M. (2012). El caso de Perú. En F. Soto y S. Gómez. Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y El Caribe: concentración y extranjerización. Roma: FAO, pp. 435-466.

Del Castillo, L. (2019). 35 años de subsidios para los agronegocios. La Revista Agraria, 20 (188), pp. 8-11.

Eguren, F. (2019). Socialismo del siglo XXI y neoliberalismo. Opciones ideológicas diversas no siempre tienen efectos diferentes. Debate Agrario, 49, pp. 39-66.

Eguren, F. (2011). Acaparamiento de tierras. Reflexiones a partir de estudios de casos en la región andina. FAO. Disponible en: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/ventos/229269/eguren.pdf

Eguren, F. (2004). Las políticas agrarias en la última década: una evaluación. Perú: El problema agrario en debate. Sepia, X, pp. 19-78.

Eguren, L., Eguren F. y Durand, F. (2018). ¿Liberalismo o mercantilismo?: concentración de la tierra y poder político en el Perú. Lima: Cepes, Oxfam.

Eguren, F. y Pintado, M. (2015). La contribución de la agricultura familiar al sector agropecuario en el Perú. Lima: Cepes.

Gamero, J. (2012). Derechos laborales y empleo en la agroexportación. Lima: Redge.

Gestión. (2020). Exportaciones peruanas se recuperan levemente en mayo, pero por debajo de expectativas. Gestión. Disponible en: <https://gestion.pe/economia/exportaciones-peruanas-se-recuperan-levemente-en-mayo-pero-aun-por-debajo-de-expectativas-noticia/>

Gestión. (2019). Agroindustrias formalizan a más de 4,000 trabajadores luego de fiscalización de Sunafil. Gestión. Disponible en: <https://gestion.pe/economia/management-empleo/agroindustrias-formalizan-4-000-trabajadores-luego-fiscalizacion-sunafil-257030-noticia/?ref=gesr>.

Gestión. (2018). Ley de Promoción Agraria generó más de 88 mil empleos formales y más de 18 mil nuevas empresas. Gestión. Disponible en: <https://gestion.pe/economia/ley-promocion-agraria-genero-88-mil-empleos-formales-18-mil-nuevas-empresas-238159-noticia/?ref=gesr>.

Gobierno Regional de La Libertad. (2020). Sala situacional COVID-19. Facebook. Disponible en: <https://www.facebook.com/GRLaLibertad/photos/pcb.3271492599540395/3271492156207106/?type=3&theater>

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2017). XI Censo de Población y VII de Vivienda. Disponible en: <http://censo2017.inei.gob.pe/>.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2007). X Censo de Población y VI de Vivienda. Disponible en: <http://ineidw.inei.gob.pe/ineidw/>.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Organización Internacional de Migraciones (OIM). (2015). Migraciones internas en el Perú a nivel departamental. Lima: OIM.

Marshall, A. (2008). El Proyecto Especial Chavimochic: contratos agrarios entre agroexportadores y pequeños agricultores en los valles de Virú y Chao. Perú: El problema agrario en debate, Sepia, XII, pp. 553-584.

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). (2018). Indicadores laborales a nivel distrital, planillas electrónicas [archivo de datos]. Disponible en: <http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/ind-lab-a-nivel-distrital/>

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). (2017). Indicadores laborales a nivel distrital, planillas electrónicas [archivo de datos]. Disponible en: <http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/ind-lab-a-nivel-distrital/>

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). (2016). Indicadores laborales a nivel distrital, planillas electrónicas [archivo de datos]. Disponible en: <http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/ind-lab-a-nivel-distrital/>

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). (2015). Indicadores laborales a nivel distrital, planillas electrónicas [archivo de datos]. Disponible en: <http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/ind-lab-a-nivel-distrital/>

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). (2014). Indicadores laborales a nivel distrital, planillas electrónicas [archivo de datos]. Disponible en: <http://www2.trabajo.gob.pe/estadisticas/ind-lab-a-nivel-distrital/>

Minaya, E. (1995). Los campesinos y la agroindustria del espárrago en el valle de Virú. Trujillo: UNT.

Paucar, J. (2019). Régimen agrario ya cumplió con las empresas, pero los trabajadores no hemos progresado" [entrevista]. La Mula. Disponible en: <https://redaccion.lamula.pe/2019/12/06/regimen-agrario-ya-cumplio-con-las-empresas-pero-los-trabajadores-no-hemos-progresado-entrevista/jorgepaucar/>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (2019). El Reto de la igualdad. Una lectura de las dinámicas territoriales en el Perú. Lima: PNUD.

Ramos, E. (2018). Eduardo Zegarra: la agroindustria no debe asignarse una reducción de la pobreza más allá del modelo general. *Agraria.pe*. Agencia Agraria de Noticias [entrevista]. Disponible en: <https://agraria.pe/noticias/eduardo-zegarra-la-agroindustria-no-debe-asignarse-una-reduc-16893>.

Rodríguez, L. (2017). Conozca las entrañas remunerativas de la Ley de Promoción Agraria. Conexión ESAN. Disponible en: <https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2017/10/25/conozca-las-entranas-remunerativas-de-la-ley-de-promocion-agraria/>

Salazar, E. Castilla, Ó., Luna, N., Huamán, G., Cabral E. y Castro, A. (2020). Grupos económicos, negocios de la salud y extractivas recibieron préstamos de Reactiva Perú. OjoPúblico. Disponible en: <https://ojo-publico.com/1901/reactiva-peru-bancos-beneficiaron-grandes-companias>

Trabajo Digno. (2018). Régimen Laboral Agrario: en manos del Fujimorismo. Trabajo Digno. Disponible en: <http://trabajodigno.pe/regimen-laboral-agrario-en-manos-del-fujimorismo/>.

Velazco, J., Cabello, R. y Casalí, P. (2015). Los trabajadores agrarios y la seguridad social en salud del Perú. Lima: OIT.

Vergara, A. (2020). La crisis del COVID-19 como Aleph peruano. Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico. Disponible en: <https://ciup.up.edu.pe/analisis/la-crisis-covid-19-como-aleph-peruano/>

Zegarra, E. (2019). Agroexportaciones: condiciones laborales y acceso a salud de trabajadores agrícolas. Sin Fronteras. Disponible en: <http://eduardo-sinfronteras.blogspot.com/2018/06/agroexportaciones-y-condiciones.html>

DOCUMENTOS EN ESTE ÁMBITO

Serie editada conjuntamente por ILC y Oxfam

INFORME DE SÍNTESIS

- **Uneven ground: land inequality at the heart of unequal societies**
Anseeuw, W. and Baldinelli, G.M.

ESTUDIOS DE CASO

- **¿Puede la concentración de la tierra ser fuente de desarrollo?**
Un análisis de las condiciones y bienestar de trabajadores agroindustriales de la provincia de Virú
Araujo Raurau, A.L.
- **Assessing and measuring the gender gap in land rights under Communal Land Associations in Karamoja**
Lakidi Achan, P.
- **Desigualdades en el acceso a la tierra y la inserción laboral de los nicaragüenses en la agricultura de Costa Rica**
Baumeister E.
- **Global financial funds, land grabs and the reproduction of inequalities: a contribution from Brazil**
Kato, K., Furtado, F., Junior, O.A. and Siviero, J.
- **How the Talaandigs regained their ancestral lands in the Kalatungan Mountain Range**
Ravanera, R., Verdijo, T.C., and Gualberto, X.M.E.
- **La agricultura bimodal en el sector sojero: desentrañando la coexistencia entre pequeños y grandes productores en el oriente de Bolivia**
Colque, G. and Mamani, M.I.
- **La tierra entre la palma y las flores. Desigualdades y recomposiciones con marcas generacionales y de género en el municipio de María La Baja en Los Montes de María y La Unión, en el Oriente Antioqueño, Colombia**
Espinosa Rincón, N. and Jaramillo Gómez, O.E.

DOCUMENTOS CONCEPTUALES

- **Gobernanza de la tierra colectiva y su contribución a la reducción de las desigualdades**
Bautista Durán, R. and Bazoberry Chali, O.
- **Assessing and measuring the gender gap**
Scalise, E.
- **Unearthing the less visible trends in land inequality**
Wegerif, M. and Anseeuw, W.



DOCUMENTOS DE DATOS

- **Global land inequality**
Bauluz, L., Govind, Y., and Novokmet, F.
- **Methodological considerations on land inequality**
Vargas, D. and Luiselli, C.

DOCUMENTOS DE SOLUCIONES

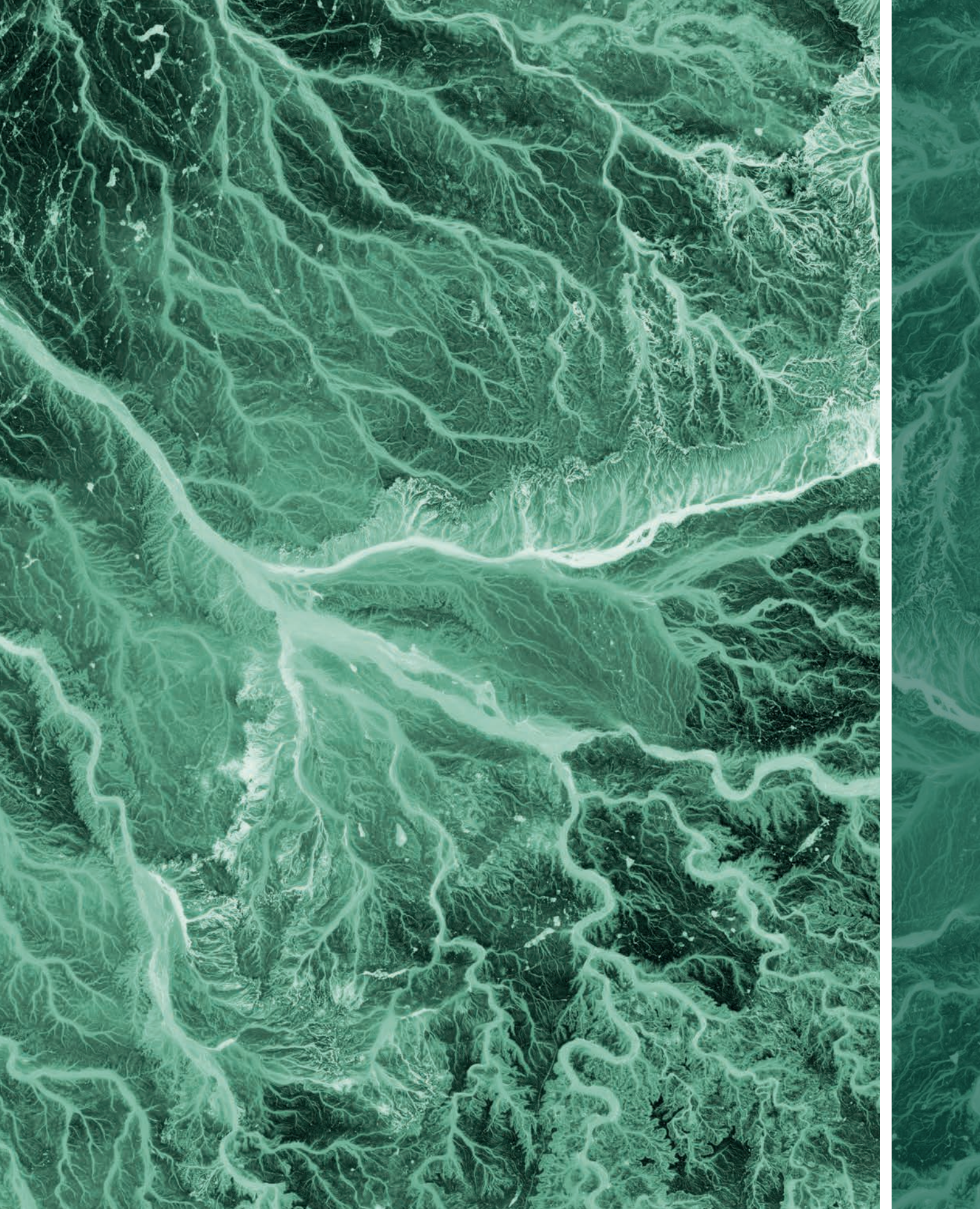
- **Acceso a la tierra en el Ecuador desde sus más recientes políticas públicas.**
Montesdoeca Chulde, D. and Ramos Bayas, M.
- **Beyond accumulation, new approaches to agricultural development in a context of natural resources pressure and climate change**
Oberlack, C., Zambrino, L.A., Truong, Q.C; Dang, B.T, Vu, X.V., Blare, T.
- **Comment rendre les investisseurs et les compagnies plus respectueuses de l'environnement et des droits de l'homme ? Etude de cas du Cameroun**
Nguiffo, S.
- **Les régulations des marchés fonciers et de l'usage de la terre: des outils pour réduire les inégalités**
Merlet, M.
- **Una oportunidad real: impuestos a la tierra**
Itriago, D.

La iniciativa sobre la desigualdad de la tierra

está dirigida por un grupo de referencia informal, compuesto por expertos en el ámbito de la tierra y las desigualdades más amplias.

Los miembros del grupo de referencia proporcionaron orientación y conocimientos especializados a lo largo del proceso e incluyen las siguientes organizaciones:





**INTERNATIONAL
LAND COALITION
SECRETARIAT**

c/o FIDA

Via Paolo di Dono, 44,
00142-Roma, Italia

tel +39 06 5459 2445
fax +39 06 5459 3445

info@landcoalition.org
www.landcoalition.org